**INFORME COMPLEMENTARIO DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY QUE REGULA ENTREVISTAS GRABADAS EN VÍDEO Y OTRAS MEDIDAS DE RESGUARDO A MENORES DE EDAD VÍCTIMAS DE DELITOS SEXUALES.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# BOLETÍN N° 9.245-07-1(C)

**HONORABLE CÁMARA:**

La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, de conformidad con lo dispuesto en el N°2 del artículo 112 del Reglamento de la Corporación, viene en informar, complementariamente, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, el proyecto de la referencia, originado en un mensaje del ex Presidente de la República señor Sebastián Piñera.

Para el despacho de esta iniciativa, S.E. la Presidenta de la República ha hecho presente la urgencia la que ha calificado de “suma” para todos sus trámites constitucionales, motivo por el cual esta Cámara cuenta con un plazo de 15 días para afinar su tramitación, término que vence el día 16 de agosto próximo por haberse dado cuenta de la urgencia en la Sala el día 1° de agosto, recién pasado.

Durante la discusión de este proyecto de ley, vuestra Comisión contó con la asistencia del Subsecretario de Justicia, don Nicolás Mena y del Jefe de la División Jurídica del Ministerio de Justicia, señor Ignacio Castillo; de la jueza coordinadora del Proyecto de Sala Especial de toma de declaración de niños, señora Nora Rosati; de los asesores de la Defensoría Penal Pública, señores Francisco Geisse y Pablo Aranda y del Coordinador Legal de la Fundación Amparo y Justicia, señor Diego Izquierdo.

**CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS.**

**1) La idea matriz o fundamental del proyecto** es la de mejorar la forma en que un menor de edad que ha sido víctima de un delito sexual se relaciona con el sistema procesal penal, de manera de minimizar la victimización secundaria que puede afectarle y dar un más efectivo resguardo a sus derechos. Para este objetivo, se establece que dicho menor no declarará en los juicios orales, sino que será interrogado únicamente en dos oportunidades que serán previas al juicio, en entrevistas que serán grabadas en vídeo y realizadas por un entrevistador especializado. La primera de dichas entrevistas se hará ante el fiscal, en cuanto se presente la respectiva denuncia, y la segunda se llevará a cabo bajo la forma de una audiencia de prueba anticipada, que será conducida por el juez de garantía.

**2) Normas de carácter orgánico constitucional.**

Vuestra Comisión mantiene el criterio del H. Senado de que revisten el carácter de normas orgánicas constitucionales, por las razones expresadas en su primer informe, las siguientes disposiciones:

a) Como normas orgánicas constitucionales en virtud de lo dispuesto en el artículo 77 de la Constitución Política de la República, en relación con el artículo 66 inciso segundo de la misma Carta Fundamental, los artículos 4º, inciso 7º; 12 (pasó a ser artículo 13); 13 (pasó a ser artículo 14); 15, inciso 3° (pasó a ser artículo 16, inciso 3°); 18 (se suprimió); 22, inciso 4° (pasó a ser artículo 23, inciso 4°) y 29 (se suprimió).

b) Como normas orgánicas constitucionales en virtud de lo dispuesto en el artículo 84 de la Constitución Política de la República, en relación con el artículo 66, inciso segundo de la misma Ley Fundamental, los artículos 4º, incisos 8º y 9º; 7º, inciso final, 8º; 9º, 10, y 31 (se suprimió).

c) Como norma de rango orgánico constitucional en virtud de lo dispuesto en el artículo 38 de la Constitución Política en relación con el mencionado artículo 66, inciso segundo, el artículo 27 (pasó a ser artículo 30).

**3) Normas de quórum calificado.**

Vuestra Comisión mantuvo el criterio del H. Senado, en orden a que revisten el carácter de normas de quórum calificado, en virtud de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 8º de la Constitución Política de la República, en relación con el artículo 66, inciso tercero de la misma Ley Fundamental, los artículos 18 (se suprimió) y 22 (pasó a ser artículo 23). Este último fue reemplazado en este trámite complementario.

**4) Requiere trámite de Hacienda.**

De conformidad a lo establecido en el Nº 5 artículo 304 del Reglamento de la Corporación, la Comisión dejó constancia que de los artículos conocidos por la Comisión de Hacienda, en el primer trámite, esto es los artículos primero, segundo, tercero y cuarto transitorios, debe nuevamente ser conocido por dicha Comisión el artículo cuarto transitorio por haber sido objeto de una nueva indicación.

**5) Comunicación a la Corte Suprema de las disposiciones incorporadas en este trámite o que han sido objeto de modificaciones sustanciales respecto de las ya conocidas por la Corte.**

Vuestra Comisión de Constitución Legislación, Justicia y Reglamento, mediante Oficio N°565-2017, comunicó las modificaciones introducidas a los artículos 4º, inciso 7º; 12 (pasó a ser artículo 13); 13 (pasó a ser artículo 14); 15, inciso 3° (pasó a ser artículo 16, inciso 3°); 18 (se suprimió); 22, inciso 4° (pasó a ser artículo 23, inciso 4°) y 29 (se suprimió), relativo a la competencia de los tribunales de justicia, previamente consultados por el Senado a la Excma. Corte Suprema.

La nueva indicación fue consultada mediante oficio N° 590-2017, de 3 de agosto del presente año, por incidir en los artículos 15, inciso 3° (pasó a ser artículo 16, inciso 3°) y 22, inciso 4° (pasó a ser artículo 23, inciso 4°), consultados previamente a al Excma. Corte Suprema.

**6) El proyecto fue aprobado en general por unanimidad.**

En sesión 252ª, de fecha 22 de marzo del 2017, se aprobó en general por la unanimidad de los diputados presentes.

Votaron por la afirmativa la diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Ceroni, don Guillermo; Coloma, don Juan Antonio; Chahin, don Fuad; Soto, don Leonardo; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

**7) Se mantiene como Diputada Informante a la señora Turres, doña Marisol.**

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**I.- DEBATE Y ACUERDOS ADOPTADOS.**

Con fecha 1° de agosto del año en curso la Cámara de Diputados, motivada en un acuerdo de los Comités Parlamentarios, remitió a vuestra Comisión de Constitución, Legislación Justicia y Reglamento, el proyecto de la referencia, para conocer y pronunciarse sobre las indicaciones formuladas por S.E. la Presidenta de la República, emitir al respectivo informe complementario y, una vez despachado, remitir el expediente a la Comisión de Hacienda, para similar propósito.

**1.- Debate previo.**

**El Jefe de la División Jurídica del Ministerio de Justicia, señor Ignacio Castillo**, explicó que algunas de las indicaciones apuntan a cuestiones que venían del proyecto original, otras que venían del proyecto que se evacuó del Senado y otras que se aprobaron por parte de esta Comisión pero que el Ejecutivo propone mejorar.

**El diputado señor Ceroni** preguntó por el tiempo de que dispondrá la Comisión para estudiar las indicaciones presentadas, ya que si bien son aspectos estudiados suficientemente muchos de ellos fueron rechazados.

**El diputado señor Saffirio**, respecto a la indicación al artículo 10 del proyecto de ley, que tiene por objeto reponer la posibilidad excepcional de realizar una segunda entrevista investigativa, observó que el inciso cuarto otorga una tercera posibilidad al fiscal, por cuanto señala “en todo caso, previo a la realización de una nueva entrevista investigativa videograbada, se deberá verificar que el niño, niña o adolescente se encuentre disponible y en condiciones físicas y psíquicas para participar en ella, para lo cual el fiscal dispondrá una nueva evaluación de un profesional de la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos…”. Hizo notar que se le está imponiendo una carga al niño, niña o adolescente.

**El Jefe de la División Jurídica del Ministerio de Justicia, señor Ignacio Castillo**, explicó que la indicación sustitutiva al artículo 10 repone la posibilidad excepcional de realizar una segunda entrevista investigativa, solo cuando surjan nuevos antecedentes que no hayan sido objeto de la primera entrevista, porque ello resulta fundamental e imprescindible para una mejor investigación.

Señaló que en los procesos de develación de los niños, niñas y adolescentes ocurre muchas veces que la víctima desea aportar nuevos antecedentes con posterioridad a la denuncia. Asimismo, aseguró que esta segunda entrevista está suficientemente regulada y limitada, exigiéndose respecto a los antecedentes que éstos sean nuevos, que no hayan sido tratados y que puedan modificar sustancialmente la investigación; además de la aprobación del Fiscal Regional respectivo.

Respecto a la intervención del diputado Saffirio, aseguró que siempre han velado por la autonomía progresiva de la voluntad del niño y que los supuestos de los incisos finales dicen relación con aquellos casos en que el niño, niña o adolecente quiere ir a prestar otra declaración voluntaria.

Resaltó la importancia de mantener la posibilidad excepcional de realizar una segunda entrevista investigativa para no ‘petrificar’ la investigación, lo que podría significar un eventual riesgo para la persecución penal e incrementar las tasas de absolución.

Sobre la indicación al artículo 15 inciso segundo, señaló que es absolutamente formal y viene a mejorar la norma que habilita al Tribunal Oral en lo Penal para sustituir el nombramiento efectuado por el Juez de Garantía. Al respecto, hizo ver que la redacción final podría generar alguna duda en su aplicación, existiendo la posibilidad de que se interprete que se trata de un segundo nombramiento, que no deja sin efecto el primero, lo que podría ocasionar una ‘contienda de competencias’ entre los dos entrevistadores. Explicó que la indicación aclara que si el Tribunal Oral en lo Penal designa a un nuevo entrevistador entonces se deja sin efecto inmediatamente la declaración de designación realizada por el Juez de Garantía.

A continuación, señaló que la indicación sustitutiva al artículo 16 busca mejorar en términos formales la redacción global del articulado y reincorporar el uso de la prueba anticipada, es decir, la posibilidad excepcional de solicitar la comparecencia judicial de la víctima que hubiere declarado anticipadamente.

Respecto a lo segundo, aseguró que la institución está suficientemente restringida, toda vez que ella procede únicamente cuando surgieren nuevos antecedentes que pudieren afectar sustancialmente el resultado del juicio. Consideró que la eliminación de esta posibilidad podría atentar contra el uso de la prueba anticipada, ya que en la práctica será muy difícil que un fiscal solicite la declaración anticipada de la víctima, toda vez que ante el surgimiento de nuevos antecedentes no se la podría citar a declarar a sede judicial, lo que se traducirá en un desincentivo a la utilización de dicha prueba, en circunstancias que la norma estaba llamada a estimular su uso.

Además, hizo notar que la imposibilidad de citar nuevamente a la víctima significará que ésta no podrá pronunciarse sobre los nuevos hechos que surjan, generándose contradicciones y vacíos en la evidencia de cargo, lo cual podría significar una reducción en las tasas de condenas.

Por su parte, explicó que la indicación al artículo 23 busca reincorporar la posibilidad de los intervinientes, particularmente la defensa, de obtener copia de la entrevista investigativa, atendido que la prohibición de obtener copia de los antecedentes de la investigación podría presentar serios cuestionamientos de constitucionalidad, por infringir el derecho de defensa del imputado, considerando, especialmente, que la prohibición recae sobre la prueba fundamental en que generalmente se fundará la acusación.

Al respecto, aseguró que el sistema contenido en la indicación regula adecuadamente la entrega de copias, ya que, para efectos de proteger la privacidad de los niños, niñas y adolescentes, la copia sólo pueda ser entregada después de que el Ministerio Público haya debidamente distorsionado todos aquellos elementos que permitieren identificarla. Además, hizo presente el proyecto establece un delito para sancionar al que difunda el contenido de la entrevista.

Por último, mencionó que la indicación sustitutiva al artículo cuarto transitorio fue solicitada por los diputados de la Comisión de Hacienda, en atención a que el artículo en cuestión utilizaba la expresión "partidas presupuestarias respectivas", no indicando ninguna partida en particular. Debido a lo anterior, a través de la indicación se especifican las partidas presupuestarias involucradas, mencionando explícitamente las Partidas 03 del Poder Judicial, 10 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la 23 del Ministerio Público.

**2.- Acuerdos adoptados.**

En virtud del acuerdo de los Comités Parlamentarios se reabrió debate sobre los siguientes artículos:

Artículo 3°

Letra f)

En virtud de las indicaciones aprobadas en el trámite anterior se corrige la omisión de la frase ", niña o adolescente” a continuación de la expresión “niño”.

Artículo 10

S.E. la Presidenta de la República formuló indicación para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 10.- De la realización de otras entrevistas investigativas videograbadas. Sólo cuando aparezcan hechos o antecedentes que no hayan sido materia de la entrevista investigativa videograbada, que modifiquen lo expuesto en ella y puedan afectar sustancialmente el curso de la investigación, el fiscal, de oficio o a solicitud de cualquiera de los intervinientes, podrá disponer la realización de una segunda entrevista investigativa videograbada, la que, en todo caso, se sujetará a las disposiciones de esta ley. Se dejará constancia en la carpeta investigativa de la decisión del fiscal y de los hechos y antecedentes que se tuvieron en cuenta para adoptarla.

No obstante lo señalado en el inciso anterior, la decisión del fiscal de disponer la realización de una segunda entrevista investigativa videograbada deberá someterse a la aprobación del Fiscal Regional.

Si el niño, niña o adolescente manifestare espontáneamente su voluntad de realizar nuevas declaraciones, el fiscal tomará todas las providencias y medidas necesarias para la realización de una nueva entrevista investigativa videograbada conforme a las disposiciones de esta ley, y bajo ningún respecto se deberá entorpecer su participación voluntaria en el proceso ni el ejercicio de sus derechos.

En todo caso, previo a la realización de una nueva entrevista investigativa videograbada, se deberá verificar que el niño, niña o adolescente se encuentre disponible y en condiciones físicas y psíquicas para participar en ella, para lo cual el fiscal dispondrá una nueva evaluación de un profesional de la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos de la fiscalía respectiva, en los términos previstos en el artículo 7º.

La nueva entrevista investigativa videograbada será realizada por el mismo entrevistador que hubiere participado en la entrevista original y sólo excepcionalmente, en caso que éste se encontrare impedido por causa debidamente justificada, el fiscal designará un nuevo entrevistador.”.

**El asesor de la Defensoría Penal Pública, señor Francisco Geisse,** manifestó que en relación con la indicación del Ejecutivo, en general podría decirse que estaban de acuerdo con muchos de los aspectos de las indicaciones.

Respecto de ésta precisa indicación, que es una indicación que busca volver a la antigua redacción de la norma, es la norma que fue aprobada por el Senado para restablecer que hay una nueva entrevista videograbada por necesidad de la investigación, lo que había sido eliminado por esta Comisión.

Así, la indicación vuelve a que sea con la autorización del fiscal y no del juez de garantías y que en el caso de entrevista videograbada voluntaria, sea el fiscal y no el juez quien la autorice. Ese es el propósito de esta indicación, es en el fondo retrotraer a lo que había sido la propuesta del Senado.

Al respecto, en primer lugar, respecto a la eliminación, lo cierto es que lo que había hecho esta Comisión sobre la segunda entrevista investigativa videograbada, había que recordar que el propósito de ello fue evitar la victimización secundaria, evitar que existieran un conjunto de entrevistas durante la etapa de investigación.

Había que considerar también que lo que se hace, es dejarle entregada al fiscal absolutamente la decisión respecto de la segunda entrevista videograbada, y que por lo tanto, si el fiscal decide por antecedentes que necesita aclarar el realizar la segunda entrevista videograbada, la defensa queda excluida de solicitar una nueva entrevista, el resto de los intervinientes queda impedido de solicitar esa segunda entrevista. Cabría hablar de una especie de preclusión.

Asimismo, cabría mencionar también la opinión de la Corte Suprema, que en el informe que se recibió en esta Comisión recientemente, señala que respecto a la facultad que el artículo 10 otorgaba al fiscal esta decisión, su eliminación se condice en la mejor forma con los principios y lineamientos señalados y reiterados que apuntan, solamente, a la realización de una entrevista única.

Respecto del segundo punto, tan sólo le parecía conveniente, sea cual sea la decisión de esta Comisión respecto del primer punto y respecto de la declaración voluntaria, que siempre sea un control judicial el que en este caso opere y que no sea solamente la decisión del fiscal, por mucho que esta decisión sea consultada al fiscal regional.

Lo anterior, porque se vela por una parte en mejor forma por los derechos, por cierto de la víctima, y en segundo lugar, por los derechos de los intervinientes. Estimaba que la intervención en este caso, que además se trata, excepcionalmente, de segunda entrevista, entrevista a la cual ha aceptado voluntariamente someterse la víctima, la mejor forma de controlar eso es con control judicial, que opere lo mismo que ha señalado la Corte Suprema, no lo iba a repetir, porque el informe ya se conoce.

Pero en el último informe, de hace dos día, reitera lo mismo, que es necesario el control judicial, que le parece la mejor forma de garantizar los derechos de las víctimas y el resto de los intervinientes en una investigación penal.

**La jueza coordinadora del Proyecto de Sala Especial de toma de declaración de niños, señora Nora Rosati**, expresó que, efectivamente, en relación a lo que informa la Corte Suprema respecto del consolidado enviado por esta Comisión, al pronunciarse en relación al artículo 10, señala lo que indica el abogado Geisse, pero lo indica en relación al ideal de la Corte Suprema, y que es la existencia de una declaración única.

Desde la perspectiva de una declaración única, obviamente la Corte estima que este artículo, con su redacción original que es la que se intenta modificar y pulirla, se condice con una sola entrevista. Sin embargo, en ese sentido, y obviamente dejando en evidencia lo que la Corte ha explicado en ese mismo sentido, particularmente desde la perspectiva de lo que realmente ocurre, la indicación del Ejecutivo aborda una problemática que es real, y que trata de la necesidad de que haya una oportunidad, tanto para que el niño pueda pedir una nueva entrevista, como para que alguno de los intervinientes pueda solicitarlo.

La solicitud, en ese sentido, ante la evidencia de la necesidad de esa solicitud, sea para los resultados que sea, sea porque el niño quiere echar pie atrás con lo que dijo, cuestión que suele suceder, o porque el niño quiere agregar ciertas cosas, todo esto siempre de la mano de lo que es el fenómeno del delito sexual y que es parte de la fenomenología de revelaciones parciales, de alguna forma recoge esa necesidad la indicación.

Y ante esa necesidad, una forma dentro de lo que son las facultades investigativas del Ministerio Público de desarrollarla y de que ésta puede llegar a puerto, la cuestión es cómo llega a puerto, y llega a puerto sobre la base de un procedimiento frente a quien tiene la investigación en su mano, con el resguardo de la verificación por parte de la Unidad Regional de Atención a Víctimas y Testigos (en adelante, ‘URAVIT’), de las condiciones en las que se encuentra el niño para poder hacerlo.

Pero sobre todo, con una cuestión que no es menor dado el interés del niño en declarar, de que efectivamente buscando su mayor protección, podamos finalmente desatender la necesidad que tiene de ser de inmediato escuchado.

El hecho de generar audiencias o procedimientos sobre la base de una solicitud, estimaba que podría finalmente tener un efecto pernicioso. El hecho de pensar en que jueces de garantía pudieran, por ejemplo, citar al niño para escucharlo, sin pensar siquiera en cuál era la normativa bajo las medidas de resguardo para poder hacer esa audiencia.

Pensar en que incluso pudiera citarse a un niño a una audiencia con todos los intervinientes presentes, para preguntarle si en verdad, en realidad quería declarar, parecía a estas alturas, atendida la finalidad de la ley, atendidas todas las medidas de protección que se han dado para que pueda declarar resguardado y sin enfrentar a tantas personas, era un contrasentido.

Desde lo que pasa todos los días, y de cómo hemos tenido que lidiar con este problema, el hecho de tener que dar la posibilidad de que alguno de los intervinientes, para una segunda entrevista, para resguardar los derechos, o el interés de la investigación o de cualquier otro interviniente.

Antes de continuar, aprovechó de aclarar algo que se habló en la sesión anterior. El hecho que la URAVIT tenga que hacer un examen de las condiciones del niño no es una otra entrevista. La URAVIT está de alguna forma representa por psicólogos, que lo que verifican es si el niño está en condiciones físicas, emocionales y psíquica de prestar una nueva declaración, y lo más rápidamente posible.

Desde ese punto de vista, pareciera que los resguardos interno de la fiscalía pudieran ser atingentes, dada la rapidez con la que hay que reaccionar, el resguardo que requiere y el hecho, insistió, desde una perspectiva muy personal, de no someter al niño a una o más audiencias y a uno o más trámites, donde la creatividad no tiene fin, de someterlo una y otra vez a trámites donde le pregunten ‘para saber si es verdad que quiere declarar y dígalo claro, frente a todos, venga acá, siéntese y dígame si es verdad o no’, y de ahí el juez tiene la duda si tiene que entrar a la sala especial para preguntarle pues eso no está especificado en la ley, entonces como no está especificado en la ley, mejor lo lleva al estrado y lo pone frente suyo y le pregunta, y como el juez no conoce los antecedentes, porque no es quien investiga, puede ser que el juez además pida todos los antecedentes y vamos haciendo audiencia para poder determinar si el niño, realmente, es verdad que quiere declarar o no.

Ese es el peligro que veía.

Sometida a votación la indicación se aprobó por 9 votos a favor y uno en contra. Votaron por la afirmativa la diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Chahin, don Fuad; Gutiérrez, don Hugo; Monckeberg, don Cristián; Saffirio, don René; Soto, don Leonardo; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo. Votó en contra el diputado señor Ceroni, don Guillermo.

Artículo 15

S.E. la Presidenta de la República formuló indicación para sustituir el inciso segundo por el siguiente:

“El tribunal de juicio oral en lo penal, al momento de dictar la resolución a que se refiere el artículo 281 del Código Procesal Penal, podrá modificar la designación a que se refiere el inciso anterior, disponiendo que actúe como intermediario en la declaración judicial un funcionario del Poder Judicial o un juez del mismo tribunal, que cuente con acreditación vigente ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.”.

**El diputado señor Chahin (Presidente)** señaló que esto sólo cambia la redacción, especificando la atribución del tribunal oral en lo penal.

Sometida a votación la indicación se aprobó por la unanimidad de los diputados presentes. Votaron por la afirmativa la diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad; Gutiérrez, don Hugo; Monckeberg, don Cristián; Saffirio, don René; Soto, don Leonardo; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

Artículo 16

S.E. la Presidenta de la República formuló indicación para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 16.- De la declaración judicial anticipada. El fiscal, la víctima, el querellante y el curador ad litem podrán solicitar la declaración judicial anticipada de los niños, niñas y adolescentes víctimas de los delitos contemplados en el artículo 1°.

La solicitud de prueba anticipada podrá realizarse desde la formalización de la investigación y hasta antes del inicio de la audiencia de juicio, debiendo siempre plantearse y desarrollarse ante el juez de garantía.

Una vez efectuada la solicitud de prueba anticipada, el juez citará a los intervinientes a una audiencia donde se discutirá su procedencia. En caso de acogerse la solicitud planteada, el juez citará a una audiencia para rendir la prueba de que se trate, notificando a todos los intervinientes y al entrevistador que designe.

La inasistencia del imputado válidamente emplazado no obstará a la validez de la audiencia en la que se rinda la prueba anticipada.

Esta prueba será incorporada en el juicio a través del soporte en que conste la videograbación, conforme a lo establecido en el artículo 331 del Código Procesal Penal.

El niño, niña o adolescente no prestará nueva declaración judicial, ya sea anticipadamente o en juicio, salvo que éste así lo solicitare libre y espontáneamente, o en caso de petición fundada de alguno de los intervinientes por la existencia de nuevos antecedentes que la justifiquen y que pudieren afectar sustancialmente el resultado del juicio.

Para dictar las resoluciones a que se refieren el presente artículo, el juez deberá considerar el interés superior del niño, niña o adolescente, así como sus circunstancias personales y psíquicas.”.

**El diputado señor Ceroni** solicitó que se votara en forma separada el inciso 6º, porque justamente esa parte es la que no comparte del artículo. En el fondo, era de la opinión que no sólo tenían que tratar de evitar de someter al niño a nuevas posibilidades de interrogación, porque creía que eso afecta al menor, que afectaba al niño y que también se puede dar para hasta una suerte de presión.

No quiere decir eso, pero más que nada, porque a lo mejor nosotros tenemos que protegerlo de todo punto de vista, y en una situación así, con todo el estrés, con toda la atención es que está sometido y todas las otras posibilidades de declaración anticipada que tenemos, volverían a someterlo nuevamente a interrogaciones.

No compartía eso.

Estimó que era una imposición es precisamente por para proteger también a los derechos de los menores teniendo claro que él obviamente las nuevas declaraciones anticipadamente u otra que tenemos ha podido decir la verdad de lo ocurrido

Aquí no se trata de ocultar la verdad, no, pero en el fondo también se trata la obligación de los fiscales la policía indagar bien lo que ocurrió y no indagarlo sometiéndolos a muchas declaraciones a los menores.

**El diputado señor Chahin (Presidente)** estimó mejor la redacción del artículo 16 original en este inciso, porque el artículo diseño original restringía la nueva declaración sólo los casos en que el niño niña o adolescente digámoslo pía de forma libre y espontánea en cambio aquí lo que se agrega nuevamente oa petición de los intervinientes al nuevamente se abre otra potencial declaración nueva ya que los niños ya no sólo cuando lo que cualquiera lo intervino entonces ya tenemos la segunda grabación no es cierto y aquí vamos a tener actualmente la tercera que ya no hacer sólo el niño sino que haga cuando lo pidan o interviniente por lo tanto creo que estamos ya hablando demasiado la posibilidad de que los niños tengan que volver a enfrentar una esta declaración judicial

**El diputado señor Saffirio** afirmó que ello también le preocupa. Asimismo, consultó de por qué en el último inciso de la indicación se separan las constancias personales de las circunstancias psíquicas, cuando al hablar de las circunstancias personales se habla de lo genérico y comprende lo específico, esto es las condiciones psíquicas. Por ello, debiera eliminarse.

**El diputado señor Andrade** consultó al representante de la defensoría, en relación con el numeral 4, la inasistencia el imputado válidamente, si le parece así tal cual está, porque aquí se está planteando la realización de la diligencia sin la presencia ni comparecencia del imputado.

**El Asesor de la Defensoría Penal Pública, señor Francisco Geisse,** señaló que al respecto de esta norma expresamos nuestra opinión contraria en su oportunidad durante la discusión problemas que entiendo que la indicación sólo repite lo que fue aprobado aquí en esa en esa materia en ese sentido yo reitero nuevamente que nos parece que el imputado debería ser válidamente emplazado pero esta comisión entiendo que no han tenido otra manera al respecto de lo que aquí se discute y yo comparto las prevenciones en el sentido de que si él puede declarar la víctima nuevamente decir hacer la década fuera anticipa nuevamente creo que es mejor que lo haga en el juicio oral si se han superado los problemas que tenía cierto y puede declarar nuevamente de manera anticipada evidentemente bien podría hacerlo en el juicio oral.

**La diputada señora Rubilar, doña Karla**, expresó que las preocupaciones eran atendibles, en el entendido que queremos proteger efectivamente a los niños, pero también queremos dentro del proceso que podamos lograr, en un caso un abuso sexual o una violación, una condena.

Obviamente, lo que tenemos que mirar aquí es que queremos en alguna oportunidad, por la protección del niño, hacer una declaración anticipada, y queremos que esa declaración anticipada no se dé sin sentido de su uso, porque lamentablemente, si nosotros planteamos que nunca podrá volver a declarar alguien que haya hecho una declaración anticipada, el fiscal tiene que sopesar eso, porque si aparecen nuevos antecedentes, que como dice la indicación son fundamentales, que cambian sustancialmente, afectan sustancialmente el resultado del juicio, como podría ser, por ejemplo, un nuevo imputado que apareció, que no se le pueda nuevamente pedir la declaración al niño, va a afectar sustancialmente también el caso.

Por lo tanto, esa imposibilidad de nueva declaración podría redundar en menos condena y podría redundar, lo más importante, en menos intenciones de los fiscales de hacer pruebas anticipadas. Entonces, si lo que nosotros queremos realmente es que esto termine en protección del niño, termine ojalá en un condenado, y que además, la prueba anticipada se utilice, tenemos que generar esta pequeña ventana, muy restrictiva, para que en situaciones muy bien fundamentadas y que, insisto, como dice el artículo, que haya nuevos antecedentes que la justifiquen y que pudiera afectar sustancialmente el resultado un juicio, tenemos que abrir esa pequeña ventana para evitar los efectos adversos.

En ese sentido, estimó que la Comisión tenía que tomar en consideración que era importante dejar este pequeño espacio para no generar efectos adversos.

**El diputado señor Squella** señaló que cabía resaltar el que tiene que ser fundada, y que efectivamente tiene que cambiar en forma sustantiva, sustancialmente el resultado del juicio. Entonces, aquí se toman las providencias necesarias.

**El diputado señor Gutiérrez, don Hugo**, manifestó que el inciso cuarto, que se haga la audiencia sin la asistencia del imputado, y que se pueda rendir la prueba anticipa tiene su correlato con este inciso final, penúltimo en realidad, donde se puede pedir que con antecedentes justificados una nueva declaración.

Justamente es lo que ocurrió en la agenda corta, donde se manifestaron en contra de una circunstancia como ésta, y bueno, lamentablemente eso lo perdieron en esa oportunidad, pero estimó que aquí era conveniente mantener el articulado como está.

**El diputado señor Saffirio** señaló que el inciso es bastante claro, habla de la inasistencia del imputado, dice la inexistencia del imputado válidamente emplazado, o sea estaban hablando de un imputado cuya defensa va a estar en la audiencia, va a ser el imputado quien estará ausente y que ha sido además previamente emplazado.

**El diputado señor Chahin (Presidente)** expresó que no pasará, porque el juez de garantía tiene que verificar que esté el defensor, o si no, se anula la audiencia.

**El diputado señor Andrade** señaló que lo que se ha señalado por el Ejecutivo, es que tal como está hecha la redacción, era evidente que la presencia del defensor está allí para los efectos de la validez.

**La diputada señora Turres, doña Marisol**, consultó, para tener algo más claro, cuando se señala que la inasistencia del imputado válidamente emplazado no restará validez a la audiencia en la que se rinda anticipadamente la prueba, aquí se señaló recién que si no asistía el imputado ni su defensor, no sería válida la audiencia, pero sí, si están válidamente emplazados.

**El Jefe de la División Jurídica del Ministerio de Justicia, señor Ignacio Castillo** señaló que el hecho de que el imputado esté válidamente notificado, lo que supone es que él tiene, por así decirlo, la obligación de comparecencia. Luego, si él no comparece, ello no obsta, que es lo que se da en este caso, que la audiencia sea válida para el efecto de la rendición de la prueba, del debate contradictorio y de la generación de la prueba, pensando en que la prueba anticipada, es un símil al escenario que se abre en el juicio oral.

Ahora, si además el defensor no fuera a la audiencia, evidentemente que no se podría realizar, porque efectivamente afectaría no solamente el derecho a la defensa material, sino que la técnica.

En este caso, seguramente, además de la sanción que corresponde para el defensor que válidamente emplazado no concurrió, se tendrá que agendar una nueva audiencia.

Se acordó votar separadamente el inciso 6°.

Sometidos a votación todos los incisos de la indicación propuesta, con excepción del 6°, se aprobaron por la unanimidad de los diputados presentes, eliminando en el inciso final las expresiones “y psíquicas”. Votaron por la afirmativa la diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad; Gutiérrez, don Hugo; Monckeberg, don Cristián; Saffirio, don René; Soto, don Leonardo; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

Sometido a votación el inciso 6°, se aprobó por 9 votos a favor y uno en contra. Votaron por la afirmativa la diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Chahin, don Fuad; Gutiérrez, don Hugo; Monckeberg, don Cristián; Saffirio, don René; Soto, don Leonardo; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo. Votó en contra el diputado señor Ceroni, don Guillermo.

Artículo 23

S.E. la Presidenta de la República formuló indicación para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 23.- Reserva del contenido de la entrevista investigativa videograbada y de la declaración judicial. El contenido de la entrevista investigativa videograbada será reservado y sólo podrán acceder a él los intervinientes, las policías, los jueces con competencia en materia de familia y los peritos que deban conocerlo con la finalidad de elaborar sus informes.

Los intervinientes, las policías y los peritos podrán obtener copia del registro de la entrevista investigativa videograbada, debiendo el fiscal entregarla, siempre que se hubiere distorsionado suficientemente aquellos elementos de la videograbación que permitiesen identificar al niño, niña o adolescente, sin que ello afecte su comprensión. Asimismo, las personas precedentemente indicadas podrán acceder al contenido íntegro y fidedigno de la entrevista investigativa videograbada, sin las distorsiones mencionadas, sólo mediante su exhibición en dependencias del Ministerio Público, debiendo siempre velar por el respeto de los derechos de los demás intervinientes. El fiscal podrá rechazar la entrega de la copia de la entrevista investigativa videograbada o su exhibición si se hubiere decretado la reserva de la entrevista conforme al inciso tercero del artículo 182 del Código Procesal Penal, sin perjuicio de los derechos de los intervinientes para limitar o poner término a la reserva conforme al inciso cuarto del mismo artículo.

La declaración judicial y la entrevista investigativa videograbada cuya reproducción fuere autorizada por el tribunal, conforme al artículo 18, sólo serán presenciadas o exhibidas por los intervinientes, salvo que el tribunal, por razones fundadas, autorice el ingreso de personas distintas a la sala de audiencia.

Los medios de comunicación social y las personas que asistan a la audiencia no podrán fotografiar o filmar parte alguna de la declaración judicial o de la entrevista investigativa videograbada del niño, niña o adolescente que se reproduzca en el juicio, ni exhibir dichas imágenes o registros, ni difundir datos que permitan identificar al declarante o a su familia, ni hacer citas textuales de su declaración. Lo anterior no obsta al derecho de los referidos medios a informar sobre el proceso y los presuntos responsables del hecho investigado.

El contenido de la declaración judicial será reservado, y ninguna persona podrá obtener copia del registro audiovisual de la misma. Los intervinientes sólo podrán obtener copia fidedigna del audio de la declaración judicial que haya prestado el niño, niña o adolescente.

El que fuera de los casos permitidos por la ley fotografíe, filme, transmita, comparta, difunda, transfiera, exhiba, o de cualquier otra forma copie o reproduzca el contenido de la entrevista investigativa videograbada o declaración judicial o su registro, sea total o parcialmente, o maliciosamente difunda imágenes o datos que identifiquen al declarante o su familia, sufrirá la pena de reclusión menor en sus grados medio a máximo.”.

**El coordinador legal de la Fundación Amparo y Justicia, señor Diego Izquierdo**, señaló que básicamente, una de las marcas principales que tenía este proyecto, es que si bien se preocupa de la protección del, niño, niña y adolescente, mantiene el debido proceso.

Desde esa perspectiva, compartían la indicación, desde la perspectiva de que debe ser necesario que todos los intervinientes tengan acceso a un contenido de la entrevista investigativa videograbada, que sus peritos puedan trabajar con ella no solamente en la fiscalía, sino eventualmente hacer una intervención con ella. Por ejemplo, hacer un zoom, modificar el audio, ampliar cosas que no podrían hacerse en el edificio del Ministerio Público.

Además, cabía pensar en casos de alta complejidad, por ejemplo, que tengan varios imputados o muchas víctimas, como puede ser un abuso sexual en un colegio, donde las dependencias de la fiscalía lisa y llanamente no van a dar abasto, y eso trae el peligro de conculcar los derechos de los distintos intervinientes.

Cabía pensar el caso que en unos días ocurrirá la formalización, y el día domingo se le ocurre algo al defensor útil para la audiencia. No podría acceder a la fiscalía porque estará cerrada, y él tiene el juicio el día lunes, o en una audiencia de revisión de prisión.

| A su juicio, ésta es una norma que resulta fundamental modificar, no solamente por el imputado y su defensa, sino también para el niño, que puede querer tener acceso, que lleva su proceso reparatorio, puede querer mostrar esto a su terapeuta. O para el querellante, que es el que representa los derechos del niño, niña, o adolescente.

Por ello, solicitó a la Comisión que apruebe la indicación del Ejecutivo.

**El diputado Monckeberg, don Cristián**, expresó que este artículo se rechazó por unanimidad, no sólo por un argumento de fondo, antes de eso, que no dice relación con la victimización secundaria sino con la victimización eterna.

Se filtra, hay antecedentes de filtraciones permanentes, en los tribunales, en la fiscalía, y sobre todo vale para los juicios. Se utilizó, se hace de buena forma, se filtra para el juicio y se predispone a la opinión pública y al ambiente para poder obtener un resultado, que es una práctica que está instalada y se está produciendo.

Entonces, en este caso, como a nosotros nos enseñaron hace bastante tiempo, lo dijo varias veces, que lo que debe primar es el interés superior del niño, aquí la victimización ya no va a ser secundaria sino que va a ser eterna.

Cuando se filtra una grabación, una declaración en este caso, grabaciones de parte de lo que ha visto, de parte de los niños, eso nunca más se elimina. No nos olvidemos que el proyecto de ley de nuestro querido diputado Ceroni sobre derecho al olvido ni siquiera voló en esta Comisión, porque los académicos, los expertos, decían que no era necesario.

Por lo tanto, lo que se busca acá, entre comillas, de proteger sobre el debido proceso, no le parecía adecuado que el debido proceso se vea complicado o enredado, incluso llegaron a decir que irían al tribunal constitucional, tan rechazado por algunos, para poder defender el proceso, que eso se vea afectado acá, porque tenga o no tenga una copia algún interviniente no le parecía adecuado, no le parecía razón.

El que no pueda, y lo han dicho tantas veces, trasladarse de un lugar a otro a ver la entrevista, como si eso produjera alguna complicación. Los diputados tienen que estar viajando permanentemente, bastantes horas en avión o en autobús para llegar acá, y nadie está pidiendo que lo hagamos otra manera, y eso lo hacen miles y miles de personas cuando tienen que cumplir bien con su trabajo.

Tampoco es un argumento el que está una sanción. Tampoco, porque el argumentó de la sanción, se sabe cómo cuesta probar esto, se filtra y para saber quién fue, al final fue Fuenteovejuna, no fue nadie, y por lo tanto no hay responsable y el niño o niña o adolescente que dio la entrevista, se filtró, está instalada en los medios de comunicación, nunca más se puede bajar y el niño va a tener ya no 5 ni 3 ni 10 años, sino que 20, 30, 40 y va a seguir ahí el vídeo, va a seguir ahí dando vueltas su declaración, por qué, porque había que proteger el debido proceso, que a su juicio está más que protegido.

Por eso nosotros unánimemente votamos en contra, eso se lo hemos manifestado al Ejecutivo y también a quienes han venido a plantear que cambiemos de opinión en esta materia. Le preocupaba el tema, porque están en esta indicación, además, los medios de comunicación, con una posibilidad de ingresar a la audiencia sin ningún tipo de limitaciones, y después se dice que si graba, ahí lo sancionó, pero ya sabemos, para qué iba a repetir argumentó.

Ya no es solamente que por una cosa del debido proceso, para que el fiscal tenga toda la posibilidad de hacerlo, y la defensoría, con ciertas limitaciones, pueda hacer bien su defensa o investigar, está muy bien. Pero otra cosa muy distinta es que además, a los medios de comunicación los dejemos entrar, y a las personas que asistan, sea cual sea, y se les dice pero que entre, pero que no puede fotografiar ni filmar, y si lo hacen, los sanciono. Pero eso es lo mismo que decir ‘haga lo que quiera’.

No es que uno ponga en duda la filtración de parte de las instituciones que están investigando, o defendiendo, sino que también aquí le estamos dando rienda suelta también al que quiera.

Perfectamente, en el ánimo de tratar de sacar el proyecto adelante y de buena manera, de tratar de despejar ciertas dudas, le costaba tragar el sapo, pero se había tragado varios, podían hacer distingos, darle esta flexibilidad a la fiscalía, a la defensoría para que tengan acceso a copias, para que puedan funcionar de cierta manera, y sanciones si es que se filtran. Pero sí ser un poquito más estricto respeto de los terceros, que quieran o pidan entrar a la audiencia, respecto de filmar, fotografiar etc.

En términos simples, para recoger los argumentos del Ejecutivo, dar la posibilidad que la fiscalía ya tiene, que la defensoría tenga acceso a copia, que la policía, los peritos tengan acceso copia. Se supone que la responsabilidad de su cargo, para llevar estos temas, y sobre todo asumiendo que son expertos en materia de investigación de delitos sexuales de menores, los va a llevar, y conocen el horror de lo que significa, los va a llevar a que ni siquiera duden en guardar la reserva por siempre, porque significa un daño eterno para la persona que están defendiendo.

Para poder llevar adelante una buena pericia o una buena investigación, estaba bien, pero sí sería más estricto y para eso podían buscar una fórmula de redacción, respecto del resto de personas que van a ingresar a la audiencia, hacia ellos sí sería más estricto. No decía prohibir su ingreso, porque a lo mejor eso puede provocar problemas constitucionales, no lo sabía, pero eso habría que verlo, analizarlo, pero sí que quede en manos del juez el autorizar en casos muy excepcionales, cuando sea muy fundado, a permitir el acceso a otras personas que quieran asistir a esas audiencias, a que entrasen los medios de comunicación, en general, otras personas que quieran asistir y que obviamente, se ponga en riesgo la reserva.

**El diputado señor Saffirio** manifestó que le producía mucho temor esta norma, porque era casi como borrar con el codo lo que lo que habían escrito en los artículos anteriores.

Primero, porque parte del supuesto de que la entrevista investigativa y la declaración judicial son reservadas, pero ya en el primer inciso la reserva excluye, por supuesto, a los intervinientes, pero después agrega a las policías, no dice a qué policías, o sea cualquier policía, no hace discriminación de ninguna naturaleza. La norma sobre los jueces con competencia en materia familia, no se está refiriendo a los jueces con competencia en materia de familia que estén conociendo la causa, y sólo restringe los peritos y se refiere aquí que pueden tener acceso a ella los que deben conocerlo con la finalidad de elaborar los informes.

Y después en el inciso tercero dice que en la declaración judicial, el contenido de la entrevista investigativa que ha sido grabada, podrá ser exhibida a los intervinientes durante la audiencia del juicio oral, y ahí es donde conectaba con lo que señala el diputado Monckeberg, donde dice que los medios de comunicación social o las personas que asistan a la audiencia no podrán filmar. Es decir, dónde está la reserva, si los medios de comunicación social van a estar presentes en la audiencia donde se esté exhibiendo la entrevista al niño, en que quedó la reserva.

Claramente la reserva no pasa de ser el titular del artículo 23, pero se diluye gradualmente a medida que nos vamos dando cuenta que muchas personas, no sabía por qué toda la policía, es decir de repente ponerse en una posición del absurdo es bueno, pero qué pasa si la Escuela de Carabineros quiere completa ir a una audiencia para saber cómo funciona el sistema con los niños, también pueden tener acceso a la entrevista videograbada. Es absurdo, claro que es absurdo, pero pueden hacerlo.

O si el juez de familia en un tribunal de Santiago, pero el juez de familia tiene, cumple sus funciones en Antofagasta también puede. No lo dice y no dice la norma que no es posible. Lo único que necesito, lo restringe a los peritos, a que tengan que elaborar su informe.

Por todo ello, estimó que no se lograba lo que querían.

**El diputado señor Ceroni** estimó que era bueno que se explique bien esta disposición, porque una de las cosas que en el fondo le recordaba esto, era que se discutía la dificultad que tenían los intervinientes para acceder a la información.

Mejor aclarar bien quienes eran los intervinientes, no creía que sea el público el protegido con esta norma, no lo veía como interviniente al público o al que asista a la audiencia, sería absurdo considerar a los periodistas como interviniente. Mejor aclarar bien quiénes son los intervinientes.

Desde el punto de vista procesal, aclarando eso, estimó que este era un paso bueno. Así a primera vista era un paso positivo, en el sentido de que la dificultad que teníamos antes, en que solamente se podía ver la entrevista videograbada en el lugar o en la oficina que designe el fiscal, eso era bastante limitante para poder hacer un análisis.

Por ejemplo, la defensoría para poder estudiar el caso y poder analizar bien la situación, para lo que podía ocurrir digamos en el resto la audiencia y cómo encararla, obviamente que también aquí se dice expresamente que se distorsione de tal forma que no se pueda saber la identidad del menor. Entonces, una filtración, en la medida en que está distorsionado y que obviamente que se parte de la base que no debería haber filtración, pero si llegara a ocurrir eso, está suficientemente distorsionada la identidad del menor.

Desde ese punto de vista, estimó positiva la propuesta, en la medida en que permite analizar bien toda la situación de la entrevista, con calma, a quien desea como un defensor local, a poder ver en forma más adecuada la información.

**La diputada señora Turres, doña Marisol**, señaló que era bastante contraria, y en esencia seguía siendo bastante contraria a la idea de que esto pueda circular. Ayer tuvo una conversación con el asesor, con la jueza, y entendiendo las razones por las cuales pueden los intervinientes tener a su alcance la información, o lo necesario que es tener a su alcance esta declaración, entendía el punto.

Pero le surgían dudas de carácter técnico. Si entregan una cinta que tiene ciertas distorsiones sobre la imagen o la voz, la consulta era si eso puede alterarse y volver al original. Se imaginaba que sí, no sabía, no era experta en la materia, solo usuaria de internet, pero le gustaría primero tener la certeza de que eso sería imposible de que alguien lo alterará de tal modo que pudiera volver a la versión original.

Lo otro, y es algo que siempre se preguntaba, era que nuestro país bien es bien especial, en el sentido que los medios de comunicación de nuestro país son especiales, porque el morbo muchas veces copa los medios de comunicación y las redes sociales.

Apuntó con esto al hecho de que puedan los medios de comunicación exhibir esta audiencia, por qué tienen que acceder. O sea alguien dice sí por la libertad de información, para exhibir a quién, al imputado quizás, pero podrían tomarle una foto en la entrada o a la salida, no se entiende de otra forma.

Pero lo inescrupuloso que se ha visto de repente a algunas personas en nuestro país, acaso no nos hacía poner más en riesgo justamente la situación de este niño, porque el solo hecho de exhibir la audiencia, puede alguien sin que nadie se dé cuenta firmar una parte, es decir hacer una copia de lo que se está exhibiendo, y es súper difícil conocer el origen de ese registro

Veía difícil que comiencen a investigar de dónde viene, quien lo subió por primera vez, etc., etc., y de ahí a que se expanda no cuesta nada. De qué forma, es cierto que es imposible asegurar en un 100% el que esto no ocurra, pero estamos diciendo que el juez puede autorizar el ingreso de personas distintas de los intervinientes a la sala de audiencia. Eso no tiene límite, puede autorizar a que entre cualquiera.

Cabía preguntarse si los medios de comunicación social tienen un derecho adquirido en el tema, sobre cuándo pueden entrar a la audiencia. Sabía que eran públicas, lo tenía claro, que todo es público, pero dónde está el límite entre lo público y el cuidado y la protección que requiere un menor víctima de delito sexual.

Son cuestionamientos que se hacía al momento de votar esto y le gustaría tener una opinión más experta al respecto, pues veía claramente una colisión de derechos.

**El diputado señor Squella** expresó que había dos temas. Uno, el acceso a la entrevista y lo otro es la audiencia.

En el primer caso, le daba la impresión que se corrige un problema y por lo mismo, seguramente la defensoría lo va a decir así, pero con este acceso quizás no íntegro, no total como como sí lo van a tener en dependencias del Ministerio Público, pero al menos se tiene, digamos, acceso a la entrevista por parte del resto de los intervinientes.

La referencia que se hacía recién al inciso primero, sería un absurdo no dar acceso a los peritos, a la policía, a los intervinientes, porque al final del día para qué se está haciendo la entrevista, es para poder hacer justicia, y para eso tenemos que tener, al menos esas personas tienen que tener acceso a la entrevista.

Le daba la impresión que cuando se le agrega, y esa es la gran diferencia que hay con lo que se votó en su momento, cuando se le agrega la palabra ‘distorsionado’, se corrige el tema. Si es que alguien no está lo suficientemente conforme con ello, quizás podría decirse ‘distorsión audiovisual’, es decir, tanto la imagen como el audio. Perfectamente se podría agregar eso.

Lo único que creía que quizá podría reforzar aún más el hecho de exponer a los menores a un eventual mal uso del contenido, es hacer un vínculo con la pena con la sanción, en caso que incluso ese material distorsionado se exhiba o se reproduzca, o toda lo que se dice en el tipo penal.

Perfectamente podríamos agregar en el inciso final, algo como la misma pena se aplicará a quien comparta, difunda, transfiera o exhiba el contenido o parte de la entrevista videograbada a que se hace referencia en el inciso segundo del presente artículo.

Algo así, para dejar también con sanción a aquellos intervinientes que exhibieron esto para, vaya a saber usted con qué fin, entregaron ese contenido, poniendo en riesgo a esa persona, aunque cueste identificarla.

En el tema de la audiencia, que es la segunda parte de las dificultades que han surgido, quiso saber cuál es la regla general, qué es lo que se puede hacer, independiente de que se trate de menores o no. Hoy día, cuáles son las atribuciones que se tienen en esa audiencia por parte del tribunal propiamente tal.

**El diputado señor Chahin (Presidente)** señaló, haciéndose cargo de una duda del diputado Ceroni y también a modo de propuesta para poder ir acotando un poquito el inciso primero, que de alguna manera sirve para de paragua para todo el resto.

Cuando se habla de intervinientes, eso está definido en el artículo 12 del Código Procesal Penal, por lo tanto, está claro quiénes son.

Pero quizás para poder resolver las dudas y los temores del diputado Saffirio, porque le parecía bien que la Comisión fuera capaz de poder permitir efectivamente que actúen no sólo los intervinientes, sino que también los auxiliares de la administración de justicia.

Por ello propone una nueva redacción del párrafo final del inciso primero, de manera que aparezca que los policías accederán en el marco una diligencia específica, los jueces de familia en el ámbito de su competencia y los peritos podrán conocerlo con la finalidad de elaborar su informe. Esta propuesta resuelve el tema completamente.

**La diputada señora Rubilar, doña Karla,** expresó que los intervinientes ya están regulados en el Código Procesal Penal, lo mismo cuando se habla de los jueces, los policías y otros, siempre se habla respecto del policía que ayuda al fiscal, el juez que lleva el caso, por eso se habla de forma genérica, pero no veía inconveniente en que se pueda redactar un poquito más específico para que no se genere ninguna duda, como la que planteaba el diputado Saffirio, pero el Código ya lo dejaba establecido, que era directo en relación a la intervención que le correspondía a cada cual.

Consultó cuál sería la propuesta que buscaba reforzar la parte de la declaración judicial, sobre cuándo puede el juez, acceder el tribunal por razones fundadas, a disponer el ingreso de otras personas. Entendía que lo que buscaba el diputado Monckeberg era reforzar un poco el tercer inciso del artículo, y tal vez, en la discusión, entendiendo que no hay mayor discusión, que estaban todos de acuerdo en que se salvó la parte que le preocupaba a la defensoría, y que era justa la preocupación, porque podría tener un riesgo constitucional de no tener un derecho a la defensa, y le parecía que eso quedaba extremadamente claro ahora, de que van a poder tener acceso a las copias, eso estaba bien, porque se protege al menor, porque se distorsiona lo suficiente para que uno no pueda identificar quién es el menor.

Así, la única duda que va quedando es este reforzamiento que plantea el diputado Monckeberg, sobre quienes ingresan a la sala. Entonces, no sabía cuál era la diferencia que vendría teniendo con el tercer inciso que se propone, lo podían discutir para ver si lo podemos sanar, arreglar y terminar votando, que le parecía que era esa la diferencia de aún subsiste.

**La jueza coordinadora del Proyecto de Sala Especial de toma de declaración de niños, señora Nora Rosati**, manifestó que sobre los intervinientes, quienes eran, estaba zanjado. La referencia genérica sobre sujetos procesales, como las policías, la propia ley los trata de esa forma, por lo tanto, no es que pueda ser interpretado de cualquier manera.

En relación a las aprensiones de la diputada Turres, la verdad eran aprensiones que todos compartían. Los que trabajan en materia penal en este tipo de materias, efectivamente se quisiera una sola declaración, que ojalá nadie la viera, que ojalá nadie viera al niño, etc., y que mágicamente llegaran al resultado.

Planteó que mágicamente quisiera también dormir todos los días tranquila, pensando que se condenó a alguien porque hubo herramientas de ambas partes para jugar un partido limpio. Creía que era la mejor forma en la que podía reflejar lo que era el debido proceso, pues de alguna forma, por más que quisiera sancionar a alguien que estima que cometió un ilícito, quería estar segura de que esto puede no sólo decidirlo así, sino que además debe fundamentarlo en una sentencia a la luz de las leyes que los mismos diputados dictan, y a la luz de la Constitución que nos rige.

Desde esa perspectiva, a la luz de aquello, desde la perspectiva de un juez, era indudable la necesidad de que todos los intervinientes accedan a un medio de prueba tan radicalmente importante como éste, pero de una forma donde claramente al niño no se le haga pasar más desprotecciones de las que ya generaron, precisamente, el que terminara en un proceso penal.

Así, pareciera que la distorsión es suficiente. Era una de las buenas herramientas para poder adecuar aquello, y el encriptar la declaración de modo tal que nadie acceda a ella, lo único que genera es un rebote, nulidades, pues llamo al niño de nuevo para hacer otro juicio.

Y en el otro escenario, constitucionalmente, si pudiera reprobarse un artículo así, finalmente llegaríamos a un escenario peor, que es el de la no regulación, y ante la no regulación en una ley tan particular como ésta, un juez tiene que irse a las normas generales, y las normas generales, qué decir, cualquier cosa puede terminar en youtube, pues la norma general es que todo es público.

Por lo tanto, con todo respeto, manifestaba esos dos peligros.

En lo que se refiere a las preguntas sobre la audiencia. Actualmente puede sacar de la sala de audiencias a quien estime de acuerdo a sus facultades de dirección, y de acuerdo a aquella normativa específica, que no es tan buena y específica como ésta, que permitan la protección de ciertos sujetos.

Por eso mismo, antes de iniciar una audiencia, si le manifiestan el incidente, lo resuelve como tribunal junto con otros dos compañeros, y resuelven impedir que alguien ingrese a la sala de audiencia. De hecho, actualmente lo hacen cuando el niño presta declaración, la sala de audiencias se cierra.

En el proyecto se aprobó un artículo 24, 24 y siguientes, que son normativas generales de protección y particulares de protección, y además, una cuestión que fue bastante debatida, finalmente instruyeron a que el tribunal tomará una decisión de protección, al menos una de manera general. Por lo tanto, pareciera que por esa vía, también pudiera haber un resguardo.

**El diputado señor Chahin (Presidente)** señaló que efectivamente se altera el principio, el principio general es que todos pueden ingresar, a lo que el juez debe fundamentar por qué no. Aquí, en este tipo de casos, la regla será que no pueden ingresar, salvo que el juez lo permita.

**La diputada señora Turres, doña Marisol**, consultó si todos entendían que el último inciso se refiere a la grabación original o distorsionada, si acaso no sería necesario especificar.

**El diputado señor Chahin (Presidente)** estimó que no, pues habla de su contenido.

Sometida a votación la indicación se aprobó por la unanimidad de los diputados presentes, sustituyendo en el inciso primero el párrafo a continuación del primer punto seguido (.) por el siguiente: “El contenido de la entrevista investigativa videograbada será reservado y sólo podrán acceder a él los intervinientes, las policías en el cumplimiento de una diligencia específica, los jueces de familia dentro del ámbito de su competencia y los peritos que deban conocerlo con la finalidad de elaborar sus informes.”.

Votaron por la afirmativa la diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad; Gutiérrez, don Hugo; Monckeberg, don Cristián; Saffirio, don René; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

Disposiciones transitorias

S.E. la Presidenta de la República formuló indicación para sustituir el artículo cuarto transitorio por el siguiente:

“Artículo cuarto.- El mayor gasto que represente la aplicación de la presente ley durante el primer año presupuestario de su entrada en vigencia, se financiará con cargo a las partidas 03 Poder Judicial, 10 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y 23 Ministerio Público, y en lo que faltare, con cargo a los recursos de la partida presupuestaria Tesoro Público, de la Ley de Presupuestos del Sector Público. En los años siguientes, los recursos se consultarán en los presupuestos de las respectivas partidas presupuestarias.”.

Sometida a votación la indicación se aprobó por la unanimidad de los diputados presentes. Votaron por la afirmativa la diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad; Gutiérrez, don Hugo; Monckeberg, don Cristián; Saffirio, don René; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

II.- ARTÍCULOS E INDICACIONES RECHAZADAS O DECLARADAS INADMISIBLES.

No hay artículos ni indicaciones en tal sentido.

**III.- ADICIONES Y ENMIENDAS QUE LA COMISIÓN APROBÓ AL TEXTO PROPUESTO EN SU PRIMER INFORME.**

Artículo 3°

Letra f)

Se agrega la frase ", niña o adolescente” a continuación de la expresión “niño”.

Artículo 10

Se reemplazó por el siguiente:

“Artículo 10.- De la realización de otras entrevistas investigativas videograbadas. Sólo cuando aparezcan hechos o antecedentes que no hayan sido materia de la entrevista investigativa videograbada, que modifiquen lo expuesto en ella y puedan afectar sustancialmente el curso de la investigación, el fiscal, de oficio o a solicitud de cualquiera de los intervinientes, podrá disponer la realización de una segunda entrevista investigativa videograbada, la que, en todo caso, se sujetará a las disposiciones de esta ley. Se dejará constancia en la carpeta investigativa de la decisión del fiscal y de los hechos y antecedentes que se tuvieron en cuenta para adoptarla.

No obstante lo señalado en el inciso anterior, la decisión del fiscal de disponer la realización de una segunda entrevista investigativa videograbada deberá someterse a la aprobación del Fiscal Regional.

Si el niño, niña o adolescente manifestare espontáneamente su voluntad de realizar nuevas declaraciones, el fiscal tomará todas las providencias y medidas necesarias para la realización de una nueva entrevista investigativa videograbada conforme a las disposiciones de esta ley, y bajo ningún respecto se deberá entorpecer su participación voluntaria en el proceso ni el ejercicio de sus derechos.

En todo caso, previo a la realización de una nueva entrevista investigativa videograbada, se deberá verificar que el niño, niña o adolescente se encuentre disponible y en condiciones físicas y psíquicas para participar en ella, para lo cual el fiscal dispondrá una nueva evaluación de un profesional de la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos de la fiscalía respectiva, en los términos previstos en el artículo 7º.

La nueva entrevista investigativa videograbada será realizada por el mismo entrevistador que hubiere participado en la entrevista original y sólo excepcionalmente, en caso que éste se encontrare impedido por causa debidamente justificada, el fiscal designará un nuevo entrevistador.”.

Artículo 15

Se reemplazó el inciso segundo por el siguiente:

“El tribunal de juicio oral en lo penal, al momento de dictar la resolución a que se refiere el artículo 281 del Código Procesal Penal, podrá modificar la designación a que se refiere el inciso anterior, disponiendo que actúe como intermediario en la declaración judicial un funcionario del Poder Judicial o un juez del mismo tribunal, que cuente con acreditación vigente ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.”.

Artículo 16

Se reemplazó por el siguiente:

Artículo 16.- De la declaración judicial anticipada. El fiscal, la víctima, el querellante y el curador ad litem podrán solicitar la declaración judicial anticipada de los niños, niñas y adolescentes víctimas de los delitos contemplados en el artículo 1°.

La solicitud de prueba anticipada podrá realizarse desde la formalización de la investigación y hasta antes del inicio de la audiencia de juicio, debiendo siempre plantearse y desarrollarse ante el juez de garantía.

Una vez efectuada la solicitud de prueba anticipada, el juez citará a los intervinientes a una audiencia donde se discutirá su procedencia. En caso de acogerse la solicitud planteada, el juez citará a una audiencia para rendir la prueba de que se trate, notificando a todos los intervinientes y al entrevistador que designe.

La inasistencia del imputado válidamente emplazado no obstará a la validez de la audiencia en la que se rinda la prueba anticipada.

Esta prueba será incorporada en el juicio a través del soporte en que conste la videograbación, conforme a lo establecido en el artículo 331 del Código Procesal Penal.

El niño, niña o adolescente no prestará nueva declaración judicial, ya sea anticipadamente o en juicio, salvo que éste así lo solicitare libre y espontáneamente, o en caso de petición fundada de alguno de los intervinientes por la existencia de nuevos antecedentes que la justifiquen y que pudieren afectar sustancialmente el resultado del juicio.

Para dictar las resoluciones a que se refiere el presente artículo, el juez deberá considerar el interés superior del niño, niña o adolescente, así como sus circunstancias personales.

Artículo 23

Se reemplazó por el siguiente:

“Artículo 23.- Reserva del contenido de la entrevista investigativa videograbada y de la declaración judicial. El contenido de la entrevista investigativa videograbada será reservado y sólo podrán acceder a él los intervinientes, las policías en el cumplimiento de una diligencia específica, los jueces de familia dentro del ámbito de su competencia y los peritos que deban conocerlo con la finalidad de elaborar sus informes.

Los intervinientes, las policías y los peritos podrán obtener copia del registro de la entrevista investigativa videograbada, debiendo el fiscal entregarla, siempre que se hubiere distorsionado suficientemente aquellos elementos de la videograbación que permitiesen identificar al niño, niña o adolescente, sin que ello afecte su comprensión. Asimismo, las personas precedentemente indicadas podrán acceder al contenido íntegro y fidedigno de la entrevista investigativa videograbada, sin las distorsiones mencionadas, sólo mediante su exhibición en dependencias del Ministerio Público, debiendo siempre velar por el respeto de los derechos de los demás intervinientes. El fiscal podrá rechazar la entrega de la copia de la entrevista investigativa videograbada o su exhibición si se hubiere decretado la reserva de la entrevista conforme al inciso tercero del artículo 182 del Código Procesal Penal, sin perjuicio de los derechos de los intervinientes para limitar o poner término a la reserva conforme al inciso cuarto del mismo artículo.

La declaración judicial y la entrevista investigativa videograbada cuya reproducción fuere autorizada por el tribunal, conforme al artículo 18, sólo serán presenciadas o exhibidas por los intervinientes, salvo que el tribunal, por razones fundadas, autorice el ingreso de personas distintas a la sala de audiencia.

Los medios de comunicación social y las personas que asistan a la audiencia no podrán fotografiar o filmar parte alguna de la declaración judicial o de la entrevista investigativa videograbada del niño, niña o adolescente que se reproduzca en el juicio, ni exhibir dichas imágenes o registros, ni difundir datos que permitan identificar al declarante o a su familia, ni hacer citas textuales de su declaración. Lo anterior no obsta al derecho de los referidos medios a informar sobre el proceso y los presuntos responsables del hecho investigado.

El contenido de la declaración judicial será reservado, y ninguna persona podrá obtener copia del registro audiovisual de la misma. Los intervinientes sólo podrán obtener copia fidedigna del audio de la declaración judicial que haya prestado el niño, niña o adolescente.

El que fuera de los casos permitidos por la ley fotografíe, filme, transmita, comparta, difunda, transfiera, exhiba, o de cualquier otra forma copie o reproduzca el contenido de la entrevista investigativa videograbada o declaración judicial o su registro, sea total o parcialmente, o maliciosamente difunda imágenes o datos que identifiquen al declarante o su familia, sufrirá la pena de reclusión menor en sus grados medio a máximo.”.

Disposiciones Transitorias

Se reemplazó el artículo cuarto transitorio por el siguiente:

“Artículo cuarto.- El mayor gasto que represente la aplicación de la presente ley durante el primer año presupuestario de su entrada en vigencia, se financiará con cargo a las partidas 03 Poder Judicial, 10 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y 23 Ministerio Público, y en lo que faltare, con cargo a los recursos de la partida presupuestaria Tesoro Público, de la Ley de Presupuestos del Sector Público. En los años siguientes, los recursos se consultarán en los presupuestos de las respectivas partidas presupuestarias.”.

**IV.- TEXTO DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN.**

Por las razones señaladas y por las que expondrá oportunamente el señor Diputado Informante, esta Comisión recomienda aprobar el siguiente:

PROYECTO DE LEY:

“TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°.- Objeto de la ley. La presente ley regula la realización de la entrevista investigativa videograbada y de la declaración judicial con el objeto de prevenir la victimización secundaria de niños, niñas o adolescentes que hayan sido víctimas de los delitos contemplados en los Párrafos 5 y 6 del Título VII del Libro II, y en los artículos 141 incisos cuarto y quinto, 142, 372 bis, 374 bis, 390, 391, 395, 397 N° 1, 411 bis, 411 ter, 411 quáter y 433 N° 1, todos del Código Penal.

Mediante la prevención de la victimización secundaria se busca evitar toda consecuencia negativa que puedan sufrir los niños, niñas o adolescentes con ocasión de su interacción, en calidad de víctimas, con las personas o instituciones que intervienen en las etapas de denuncia, investigación y juzgamiento de los delitos señalados en el inciso anterior.

Asimismo, para los efectos de esta ley, se considera niño o niña a toda persona menor de catorce años de edad y adolescente a todos los que hayan cumplido catorce años y no hayan alcanzado la mayoría de edad.

Las normas de la presente ley se aplicarán con pleno respeto de los derechos asegurados en la Convención de Derechos del Niño.

Artículo 2°.- Especialidad. Las disposiciones contenidas en la presente ley se aplicarán con preferencia a las del Código Procesal Penal.

Artículo 3°.- Principios de aplicación. Las interacciones con niños, niñas o adolescentes en las etapas de denuncia, investigación y juzgamiento estarán sometidas a los siguientes principios de aplicación:

a) Interés superior. Los niños, niñas o adolescentes son sujetos de derecho, por lo que las personas e instituciones que deban intervenir en las etapas de denuncia, investigación y juzgamiento procurarán generar las condiciones necesarias para que en cada etapa del proceso aquéllos puedan ejercer plenamente sus derechos y garantías conforme al nivel de desarrollo de sus capacidades.

b) Autonomía progresiva. Los niños, niñas o adolescentes son sujetos dotados de autonomía progresiva, por lo que en las etapas de denuncia, investigación y juzgamiento tendrán derecho a ser oídos y participar en los asuntos que les afecten, atendiendo a su edad y el grado de madurez que manifiesten.

c) Participación voluntaria. La participación de los niños, niñas o adolescentes, en las etapas de denuncia, investigación y juzgamiento será siempre voluntaria, y no podrán ser forzados a intervenir en ellas por persona alguna bajo ninguna circunstancia.

Los funcionarios públicos involucrados en el proceso penal deberán resguardar lo señalado en esta letra y su incumplimiento será considerado infracción grave a los deberes funcionarios.

d) Prevención de la victimización secundaria. Constituye un principio rector de la presente ley la prevención de la victimización secundaria, para cuyo propósito las personas e instituciones que intervengan en las etapas de denuncia, investigación y juzgamiento procurarán adoptar las medidas necesarias para proteger la integridad física y psíquica, así como la privacidad de los niños, niñas o adolescentes. Asimismo, procurarán la adopción de las medidas necesarias para que las interacciones descritas en la presente ley sean realizadas de forma adaptada al niño, niña o adolescente, en un ambiente adecuado a sus especiales necesidades y teniendo en cuenta su madurez intelectual y la evolución de sus capacidades, asegurando el debido respeto a su dignidad personal.

e) Asistencia oportuna y tramitación preferente. Las personas e instituciones que intervengan en las etapas de denuncia e investigación procurarán adoptar las medidas necesarias para favorecer la asistencia oportuna de los niños, niñas o adolescentes, como también la tramitación preferente de las diligencias de investigación.

Por su parte, los tribunales con competencia en lo penal, de oficio o a petición de parte, programarán con preferencia aquellas audiencias en que se traten materias relativas a niños, niñas o adolescentes, víctimas. Asimismo, en casos en los que así se precise, el tribunal dispondrá todas las medidas para otorgar celeridad a las actuaciones, de manera tal de agilizar el procedimiento con el fin de minimizar el período en que el niño, niña o adolescente deba participar en el proceso penal.

Los fiscales tramitarán con preferencia las causas a que hace referencia la presente ley, de acuerdo con las instrucciones generales que dicte el Fiscal Nacional.

f) Resguardo de su dignidad. Todo niño, **niña o adolescente** es una persona única y valiosa y, como tal, se deberá respetar y proteger su dignidad individual, sus necesidades particulares, sus intereses y su intimidad.

TÍTULO II

DENUNCIA, ENTREVISTA INVESTIGATIVA VIDEOGRABADA Y DECLARACIÓN JUDICIAL

1. De la denuncia

Artículo 4°.- De la denuncia. La denuncia deberá efectuarse en los términos previstos en el artículo 173 del Código Procesal Penal.

Cuando la denuncia sea efectuada por un niño, niña o adolescente deberá ser recibida en condiciones que garanticen su participación voluntaria, privacidad, seguridad y que permitan controlar la presencia de otras personas.

El funcionario que reciba la denuncia consultará al niño, niña o adolescente sus datos de identificación y luego se limitará a registrar, de manera íntegra, todas las manifestaciones verbales y conductuales que voluntariamente éste exprese respecto al objeto de su denuncia. Si no quisiera identificarse, o sólo lo hiciere parcialmente o mediante un apelativo, no podrá ser expuesto a nuevas preguntas al respecto.

En ningún caso el niño, niña o adolescente podrá ser expuesto a preguntas que busquen establecer la ocurrencia de los hechos o la determinación de sus partícipes.

Si un niño, niña o adolescente acude a interponer la denuncia acompañado por un adulto de su confianza, se deberá garantizar que en ningún caso su participación voluntaria sea reemplazada por la intervención del adulto. Con todo, dicho adulto podrá, a su turno, exponer el conocimiento que tuviere de los hechos expuestos por el niño, niña o adolescente. En este caso, se podrán dirigir al adulto todas las preguntas que sean necesarias realizar en relación con los hechos denunciados por el niño, niña o adolescente, como también para determinar la identidad del niño, niña o adolescente cuando éste no haya querido identificarse, o sólo lo haya hecho parcialmente o mediante un apelativo. En este caso, se evitará en todo momento que el niño, niña o adolescente escuche el relato del adulto y las preguntas que a éste se le realicen. Se procurará, del mismo modo, que el adulto no influya en la información espontáneamente manifestada por el niño, niña o adolescente.

La denuncia deberá ser recibida de manera inmediata y, en los casos en que ésta no se efectúe directamente en dependencias del Ministerio Público, deberá ser puesta en conocimiento del fiscal que corresponda, de la forma más rápida posible y por la vía más expedita. En todo caso, el plazo máximo para hacer esta comunicación no podrá ser superior a ocho horas.

Si con ocasión de una pericia que hubiere sido ordenada en el curso de un procedimiento penal, el niño niña o adolescente señalare antecedentes que hicieren presumible la comisión de un delito de aquéllos contemplados en el inciso primero del artículo 1º, el perito, desde el momento de la revelación, se ceñirá a lo previsto en los incisos precedentes y deberá poner los antecedentes en conocimiento del Ministerio Público, dentro del plazo máximo de veinticuatro horas. Asimismo, si la pericia hubiere sido ordenada por un tribunal con competencia en materias de familia, el perito deberá comunicar a dicho tribunal, dentro del plazo máximo de veinticuatro horas, los hechos que haya conocido, tribunal que, con el mérito de la comunicación, ordenará remitir copia de los antecedentes de la causa al Ministerio Público.

Habiendo tomado conocimiento de la denuncia, el Ministerio Público determinará las diligencias de investigación que se deban llevar a cabo y solicitará las medidas tendientes a proteger y asistir al niño, niña o adolescente que haya sido víctima, dentro de un plazo máximo de veinticuatro horas, término que se contará desde la recepción de la denuncia.

Con todo, si se detectaren antecedentes de grave vulneración de derechos del niño, niña o adolescente, atribuibles a acciones u omisiones del padre, de la madre o de ambos, o de la persona que lo tenga bajo su cuidado u otra persona que viva con él o ella, el Ministerio Público informará al juzgado con competencia en materias de familia o al juez de garantía competente, de manera inmediata y por la vía más expedita posible, con el fin de requerir la adopción de medidas de protección.

2. De la entrevista investigativa videograbada.

Artículo 5°.- Objeto de la entrevista investigativa videograbada. La entrevista investigativa videograbada tendrá como propósito disponer de antecedentes que puedan orientar el desarrollo de la investigación penal mediante la información que el niño, niña o adolescente entregue de los hechos denunciados y de sus partícipes, cualquiera sea la forma en que ésta se exprese, procurando, por esta vía, evitar la exposición reiterada e injustificada del niño, niña o adolescente a instancias que busquen establecer la ocurrencia de los hechos materia de la investigación y de la participación criminal. Esta entrevista deberá ser videograbada, según lo dispone el artículo 22.

Artículo 6°.- Designación del entrevistador. La entrevista investigativa videograbada será realizada por un entrevistador designado por el fiscal, de entre los que cuenten con acreditación vigente en el registro de entrevistadores elaborado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Artículo 7º.- Oportunidad de la entrevista investigativa videograbada. La entrevista investigativa videograbada se realizará en el tiempo más próximo a la denuncia, a menos que el niño, niña o adolescente no se encuentre disponible y en condiciones físicas y psíquicas para participar en ella, lo que deberá ser calificado por un profesional de la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos de la fiscalía respectiva.

La evaluación del profesional de la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos del Ministerio Público se realizará en el menor tiempo posible y en condiciones que garanticen la menor interacción presencial del niño, niña o adolescente. Los profesionales a cargo de esta evaluación en ningún caso podrán hacer al niño, niña o adolescente preguntas que busquen establecer la ocurrencia de los hechos o la determinación de sus partícipes.

El Ministerio Público deberá adoptar las medidas de protección que resulten pertinentes atendidas las circunstancias personales del niño, niña o adolescente, y que propendan a su participación voluntaria en la investigación.

Artículo 8º.- Del desarrollo de la entrevista investigativa videograbada. La entrevista investigativa videograbada se desarrollará en una sala que cumpla con lo previsto en los artículos 20 y 21 de esta ley, y en la que sólo estarán presentes el entrevistador y el niño, niña o adolescente. Sin perjuicio de lo anterior, en aquellos casos en que existan dificultades de comunicación con el entrevistado, el fiscal podrá autorizar la presencia de un traductor, intérprete u otro especialista profesional o técnico idóneo.

Artículo 9º.- Suspensión de la entrevista investigativa videograbada. Si surge algún motivo que impida al niño, niña o adolescente continuar interviniendo en el desarrollo de esta diligencia, el fiscal, a sugerencia del entrevistador, la suspenderá por el tiempo mínimo necesario de acuerdo con el motivo de la suspensión.

**Artículo 10.- De la realización de otras entrevistas investigativas videograbadas. Sólo cuando aparezcan hechos o antecedentes que no hayan sido materia de la entrevista investigativa videograbada, que modifiquen lo expuesto en ella y puedan afectar sustancialmente el curso de la investigación, el fiscal, de oficio o a solicitud de cualquiera de los intervinientes, podrá disponer la realización de una segunda entrevista investigativa videograbada, la que, en todo caso, se sujetará a las disposiciones de esta ley. Se dejará constancia en la carpeta investigativa de la decisión del fiscal y de los hechos y antecedentes que se tuvieron en cuenta para adoptarla.**

**No obstante lo señalado en el inciso anterior, la decisión del fiscal de disponer la realización de una segunda entrevista investigativa videograbada deberá someterse a la aprobación del Fiscal Regional.**

**Si el niño, niña o adolescente manifestare espontáneamente su voluntad de realizar nuevas declaraciones, el fiscal tomará todas las providencias y medidas necesarias para la realización de una nueva entrevista investigativa videograbada conforme a las disposiciones de esta ley, y bajo ningún respecto se deberá entorpecer su participación voluntaria en el proceso ni el ejercicio de sus derechos.**

**En todo caso, previo a la realización de una nueva entrevista investigativa videograbada, se deberá verificar que el niño, niña o adolescente se encuentre disponible y en condiciones físicas y psíquicas para participar en ella, para lo cual el fiscal dispondrá una nueva evaluación de un profesional de la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos de la fiscalía respectiva, en los términos previstos en el artículo 7º.**

**La nueva entrevista investigativa videograbada será realizada por el mismo entrevistador que hubiere participado en la entrevista original y sólo excepcionalmente, en caso que éste se encontrare impedido por causa debidamente justificada, el fiscal designará un nuevo entrevistador.**

Artículo 11.- Otras diligencias investigativas. Las demás diligencias investigativas que supongan una interacción presencial con el niño, niña o adolescente serán realizadas excepcionalmente, y sólo cuando sean absolutamente necesarias. Se deberá dejar constancia en la carpeta investigativa sobre las razones y los fundamentos que se tuvieron en cuenta para decretar estas diligencias.

Para los efectos de la elaboración de todo informe pericial médico legal, los profesionales a cargo de dichas diligencias deberán limitarse exclusivamente a practicar una anamnesis, los reconocimientos, pruebas biológicas y exámenes médicos que correspondan, y no podrán en caso alguno formular al niño, niña o adolescente preguntas relativas a la participación criminal, al relato de la agresión sufrida o, en general, que busquen establecer la ocurrencia de los hechos materia de la investigación

En el caso que el fiscal ordene o autorice la realización de una pericia psicológica, deberá justificar su decisión según las instrucciones generales que dicte el Fiscal Nacional.

Artículo 12.- Prohibición de referirse al contenido de la entrevista investigativa. Los testigos citados a declarar al juicio oral no podrán hacer alusión al contenido de la entrevista investigativa que hubiere prestado el niño, niña o adolescente. Esta prohibición no se aplicará a los peritos.

3. De la declaración judicial

Artículo 13.- Objeto de la declaración judicial. Esta declaración tendrá como propósito que el niño, niña o adolescente preste declaración en juicio en una sala que cumpla con lo previsto en los artículos 20 y 21 de esta ley, y en la que sólo estarán presentes el entrevistador y el niño, niña o adolescente. Sin perjuicio de lo anterior, en aquellos casos en que existan dificultades de comunicación con el niño, niña o adolescente, el tribunal podrá autorizar la presencia de un traductor, intérprete u otro especialista profesional o técnico idóneo.

Sin perjuicio del registro de la audiencia, esta declaración deberá ser videograbada de manera independiente, según lo dispone el artículo 22.

Artículo 14.- Declaración voluntaria en juicio de los adolescentes. No obstante lo indicado en el artículo anterior, los adolescentes, cuando así lo manifestaren libre y voluntariamente, podrán declarar en el juicio sin la intervención de entrevistador. El tribunal, previo a autorizar dicha solicitud, deberá velar por que el adolescente se encuentre disponible y en condiciones físicas y psíquicas para participar en ella.

En tal caso, el adolescente prestará declaración en una sala distinta de aquella en que se encuentren los demás intervinientes, especialmente acondicionada para ello y que cuente con un sistema interconectado de comunicación que permita que el juez lo interrogue presencialmente en dicha sala, debiendo los demás intervinientes dirigir las preguntas por su intermedio.

Artículo 15.- Designación del entrevistador que actuará como intermediario en la declaración judicial. Durante la audiencia de preparación de juicio oral, el juez de garantía designará al entrevistador que actuará como intermediario en la declaración judicial. Para tales efectos, el juez seleccionará al entrevistador de entre aquellos que cuenten con acreditación vigente ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, debiendo escuchar previamente a los intervinientes.

**El tribunal de juicio oral en lo penal, al momento de dictar la resolución a que se refiere el artículo 281 del Código Procesal Penal, podrá modificar la designación a que se refiere el inciso anterior, disponiendo que actúe como intermediario en la declaración judicial un funcionario del Poder Judicial o un juez del mismo tribunal, que cuente con acreditación vigente ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.**

En ningún caso este entrevistador podrá ser un fiscal adjunto o abogado asistente de fiscal, ni tampoco algún funcionario de la Policía de Investigaciones de Chile o Carabineros de Chile que hubiere participado en alguna diligencia de investigación distinta de la entrevista investigativa videograbada.

Si el entrevistador que hubiere sido designado por el juez de garantía se encontrare impedido para actuar como intermediario en la declaración judicial, el tribunal o juez de garantía, en su caso, de oficio o a petición de cualquiera de los intervinientes, procederá a la designación de un nuevo entrevistador.

**Artículo 16.- De la declaración judicial anticipada. El fiscal, la víctima, el querellante y el curador ad litem podrán solicitar la declaración judicial anticipada de los niños, niñas y adolescentes víctimas de los delitos contemplados en el artículo 1°.**

**La solicitud de prueba anticipada podrá realizarse desde la formalización de la investigación y hasta antes del inicio de la audiencia de juicio, debiendo siempre plantearse y desarrollarse ante el juez de garantía.**

**Una vez efectuada la solicitud de prueba anticipada, el juez citará a los intervinientes a una audiencia donde se discutirá su procedencia. En caso de acogerse la solicitud planteada, el juez citará a una audiencia para rendir la prueba de que se trate, notificando a todos los intervinientes y al entrevistador que designe.**

**La inasistencia del imputado válidamente emplazado no obstará a la validez de la audiencia en la que se rinda la prueba anticipada.**

**Esta prueba será incorporada en el juicio a través del soporte en que conste la videograbación, conforme a lo establecido en el artículo 331 del Código Procesal Penal.**

**El niño, niña o adolescente no prestará nueva declaración judicial, ya sea anticipadamente o en juicio, salvo que éste así lo solicitare libre y espontáneamente, o en caso de petición fundada de alguno de los intervinientes por la existencia de nuevos antecedentes que la justifiquen y que pudieren afectar sustancialmente el resultado del juicio.**

**Para dictar las resoluciones a que se refiere el presente artículo, el juez deberá considerar el interés superior del niño, niña o adolescente, así como sus circunstancias personales.**

Artículo 17.- Del desarrollo de la declaración judicial. La declaración judicial se desarrollará bajo la dirección, control y supervisión del juez presidente del tribunal o del juez de garantía, en su caso, en una sala distinta a aquella en que se realice la audiencia, especialmente acondicionada para ello, que cumpla los requisitos de los artículos 20 y 21 de la presente ley, y que cuente con un sistema interconectado de comunicación con la sala de audiencia.

La declaración judicial deberá realizarse de manera continua en un único día, sin perjuicio de lo cual podrán realizarse las pausas necesarias para el descanso del niño, niña o adolescente, debiendo siempre considerarse su interés superior, tanto para decretar la suspensión como para ordenar las reanudación de la declaración.

El juez presidente del tribunal o juez de garantía deberá velar, en todo momento, porque el entrevistador desarrolle su actividad en la declaración judicial de manera imparcial y neutral, cautelando especialmente que realice las preguntas conforme al inciso siguiente.

Los intervinientes dirigirán sus preguntas al juez, quien, en su caso, las transmitirá al entrevistador. Éste, a su vez, deberá plantear al niño, niña o adolescente las preguntas en un lenguaje y modo adecuados a su edad, madurez y condición psíquica.

Artículo 18.- Reproducción del video de la entrevista investigativa videograbada en la audiencia de juicio. Durante el desarrollo de la audiencia de juicio, el tribunal podrá permitir la exhibición del registro de la entrevista investigativa videograbada sólo en los siguientes casos:

a) Cuando se tratare de entrevistas investigativas videograbadas realizadas a niños, niñas o adolescentes que hubieren fallecido, o caído en incapacidad mental o física que les inhabilitare para comparecer a la audiencia de juicio.

b) Cuando se tratare de entrevistas realizadas a niños, niñas o adolescentes que, durante su comparecencia a la audiencia de juicio oral, sufrieren una incapacidad grave, psíquica o física, para prestar declaración.

c) Cuando sea necesario para complementar la declaración prestada, o para demostrar contradicciones o inconsistencias con lo declarado. En este caso, para autorizar la exhibición del registro será requisito que el niño, niña o adolescente haya declarado previamente en la audiencia de juicio o en la audiencia de prueba anticipada.

d) Cuando se haya citado al entrevistador que haya realizado la entrevista investigativa, con la finalidad de revisar la metodología empleada. En este caso regirá la prohibición dispuesta en el artículo 12, y la declaración del entrevistador y la exhibición del video se limitarán únicamente a informar al tribunal sobre la metodología y técnica empleadas. Además, la exhibición del video se realizará durante la declaración del entrevistador, y en ningún caso podrá sustituir la declaración judicial del niño, niña o adolescente.

La exhibición del registro de la entrevista investigativa videograbada no podrá debatirse, ordenarse o materializarse en presencia del niño, niña o adolescente.

En el caso de la letra c), toda la confrontación a que hubiere lugar se realizará entre el registro videograbado de la entrevista investigativa y el de la declaración judicial. La exhibición de la entrevista investigativa, cuando fuere autorizada, se realizará una vez concluida la participación del niño, niña o adolescente en la audiencia de juicio, y bajo ninguna circunstancia se autorizará a que se reanude su participación.

4. Disposiciones comunes a la entrevista investigativa videograbada y a la declaración judicial

Artículo 19.- Del entrevistador. La entrevista investigativa videograbada y la declaración judicial sólo podrán ser realizadas o asistidas, respectivamente, por quienes reúnan los siguientes requisitos:

a) Formación especializada en metodología y técnicas de entrevista investigativa videograbada y declaración judicial a niños y niñas o adolescentes, según disponga el reglamento, y

b) Acreditación vigente otorgada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Artículo 20.- Lugar donde deben efectuarse la entrevista investigativa videograbada y la declaración judicial. La entrevista investigativa videograbada y la declaración judicial serán realizadas en dependencias especialmente acondicionadas para ello, con los implementos adecuados en atención a la edad y a la etapa evolutiva del niño, niña o adolescente, y que reúnan las condiciones previstas en el artículo 21.

Las instituciones públicas que dispongan de tales dependencias deberán facilitar su utilización para llevar a cabo dichas diligencias. Para estos efectos, el Ministerio Público, el Poder Judicial, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile celebrarán convenios a nivel nacional o regional, entre sí y con otras instituciones públicas.

Artículo 21.- Condiciones de realización de las entrevistas investigativas videograbadas y de las declaraciones judiciales. Las entrevistas investigativas videograbadas y las declaraciones judiciales se realizarán en condiciones que:

a) Protejan la privacidad de la interacción con el niño, niña o adolescente.

b) Resguarden la seguridad del niño, niña o adolescente.

c) Permitan controlar la presencia de participantes.

d) Sean tecnológicamente adecuadas para videograbar el relato que preste el niño, niña o adolescente y, en el caso de la declaración judicial, para su reproducción instantánea y su intercomunicación.

Artículo 22.- Del registro de la entrevista investigativa videograbada y de la declaración judicial. La entrevista investigativa y la declaración judicial serán videograbadas a través de medios tecnológicos idóneos que permitan su reproducción íntegra y fidedigna.

El reglamento a que se refiere el artículo 29 determinará los estándares mínimos para la producción, almacenamiento, custodia y disposición de los registros de las entrevistas investigativas videograbada y de la declaración judicial.

**Artículo 23.- Reserva del contenido de la entrevista investigativa videograbada y de la declaración judicial. El contenido de la entrevista investigativa videograbada será reservado y sólo podrán acceder a él los intervinientes, las policías en el cumplimiento de una diligencia específica, los jueces de familia dentro del ámbito de su competencia y los peritos que deban conocerlo con la finalidad de elaborar sus informes.**

**Los intervinientes, las policías y los peritos podrán obtener copia del registro de la entrevista investigativa videograbada, debiendo el fiscal entregarla, siempre que se hubiere distorsionado suficientemente aquellos elementos de la videograbación que permitiesen identificar al niño, niña o adolescente, sin que ello afecte su comprensión. Asimismo, las personas precedentemente indicadas podrán acceder al contenido íntegro y fidedigno de la entrevista investigativa videograbada, sin las distorsiones mencionadas, sólo mediante su exhibición en dependencias del Ministerio Público, debiendo siempre velar por el respeto de los derechos de los demás intervinientes. El fiscal podrá rechazar la entrega de la copia de la entrevista investigativa videograbada o su exhibición si se hubiere decretado la reserva de la entrevista conforme al inciso tercero del artículo 182 del Código Procesal Penal, sin perjuicio de los derechos de los intervinientes para limitar o poner término a la reserva conforme al inciso cuarto del mismo artículo.**

**La declaración judicial y la entrevista investigativa videograbada cuya reproducción fuere autorizada por el tribunal, conforme al artículo 18, sólo serán presenciadas o exhibidas por los intervinientes, salvo que el tribunal, por razones fundadas, autorice el ingreso de personas distintas a la sala de audiencia.**

**Los medios de comunicación social y las personas que asistan a la audiencia no podrán fotografiar o filmar parte alguna de la declaración judicial o de la entrevista investigativa videograbada del niño, niña o adolescente que se reproduzca en el juicio, ni exhibir dichas imágenes o registros, ni difundir datos que permitan identificar al declarante o a su familia, ni hacer citas textuales de su declaración. Lo anterior no obsta al derecho de los referidos medios a informar sobre el proceso y los presuntos responsables del hecho investigado.**

**El contenido de la declaración judicial será reservado, y ninguna persona podrá obtener copia del registro audiovisual de la misma. Los intervinientes sólo podrán obtener copia fidedigna del audio de la declaración judicial que haya prestado el niño, niña o adolescente.**

**El que fuera de los casos permitidos por la ley fotografíe, filme, transmita, comparta, difunda, transfiera, exhiba, o de cualquier otra forma copie o reproduzca el contenido de la entrevista investigativa videograbada o declaración judicial o su registro, sea total o parcialmente, o maliciosamente difunda imágenes o datos que identifiquen al declarante o su familia, sufrirá la pena de reclusión menor en sus grados medio a máximo.**

“TÍTULO III

MEDIDAS DE PROTECCIÓN EN FAVOR DE LOS NIÑOS, NIÑAS O ADOLESCENTES

Artículo 24.- Medidas generales de protección. El tribunal o el juez de garantía, en su caso, de oficio o a petición de alguno de los intervinientes, deberá adoptar una o más de las siguientes medidas para proteger la identidad o la integridad física y psíquica de los niños, niñas o adolescentes:

a) Suprimir de las actas de las audiencias todo nombre, dirección o cualquier otra información que pudiera servir para identificarlo directa o indirectamente.

b) Prohibir a los intervinientes que entreguen información o formulen declaraciones a los medios de comunicación social relativas a la identidad de la víctima y su declaración.

c) Impedir el acceso de personas determinadas o al público en general, u ordenar su salida de la sala de audiencia.

d) Prohibir a los medios de comunicación social el acceso a la sala de audiencia.

e) Resguardar la privacidad del niño, niña o adolescente que concurra a declarar, y evitar que tenga contacto con los demás asistentes a la audiencia, especialmente durante el ingreso y salida del recinto donde funcione el tribunal.

Dichas medidas durarán el tiempo que el tribunal dispusiere y podrán ser renovadas cuantas veces fuere necesario.

De igual forma, el Ministerio Público, de oficio o a petición de alguno de los intervinientes, deberá adoptar todas las medidas que fueren procedentes para conferir al niño, niña o adolescente la debida protección.

Artículo 25.- Medidas especiales de protección. El juez de garantía podrá disponer, a petición del fiscal, querellante, curador ad litem o de la propia víctima, y aun antes de la formalización de la investigación, cuando existieren antecedentes que hagan presumir un peligro para el ofendido, una o más de las siguientes medidas de protección a su respecto:

a) Prohibición o limitación de la concurrencia del presunto agresor al lugar de estudio del niño, niña o adolescente, así como a cualquier otro lugar donde éstos permanezcan, visiten o concurran habitualmente. En caso de que concurran al mismo establecimiento, el juez adoptará medidas específicas tendientes a resguardar los derechos de aquellos;

b) El abandono del presunto agresor del hogar que le sirve de domicilio, residencia o morada al ofendido, cuando corresponda.

c) Confiar el cuidado del niño, niña o adolescente a una persona de su confianza, y que, a juicio del tribunal, reúna las condiciones necesarias para resguardar su integridad física y psíquica.

Cuando resulte procedente, el tribunal deberá remitir inmediatamente copia íntegra de los antecedentes que tuvo a la vista para tomar su decisión al juzgado con competencia en materias de familia correspondiente, el cual iniciará los procesos que estime pertinentes para resguardar el interés superior del niño, niña o adolescente.”.

Artículo 26.- Medidas de protección para la declaración judicial de niños, niñas o adolescentes testigos de los delitos indicados en el artículo 1°. En el caso de la declaración judicial de niños y niñas testigos, el tribunal decretará, como medida especial destinada a protegerlos, que ésta se realice en la forma señalada en el artículo 14, inciso segundo.

Si el testigo fuera un adolescente, el tribunal podrá, considerando sus circunstancias personales y psicológicas, adoptar medidas especiales de protección para impedir el contacto directo con los intervinientes y el público, incluyendo la señalada en el inciso anterior.

TÍTULO IV

DE LA FORMACIÓN Y ACREDITACIÓN DE ENTREVISTADORES Y DE LOS PROTOCOLOS DE ATENCIÓN INSTITUCIONAL

Artículo 27.- Disposición de entrevistadores. La Policía de Investigaciones de Chile, Carabineros de Chile y el Ministerio Público contarán con personal debidamente calificado, y con acreditación vigente, en metodología y técnicas de entrevista investigativa videograbada y declaración judicial a niños, niñas o adolescentes. Por su parte, el poder judicial podrá contar con jueces y funcionarios que, cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 19, puedan ser elegidos como intermediarios en la declaración judicial de conformidad con el artículo 15.

Para los efectos del inciso precedente deberán garantizar:

a) Que los entrevistadores sean idóneos para tales funciones, teniendo en consideración sus conocimientos, experiencia, motivación y, si corresponde, su conducta funcionaria previa.

b) Que los entrevistadores puedan llevar a cabo las funciones de forma exclusiva o preferente.

c) Que se creen las condiciones necesarias para la formación continua de entrevistadores, su seguimiento y evaluación.

Excepcionalmente, para garantizar el funcionamiento del sistema, en caso de no existir suficientes entrevistadores acreditados pertenecientes a la Policía de Investigaciones de Chile, Carabineros de Chile y el Ministerio Público, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública deberá proveer los entrevistadores necesarios, quienes igualmente deberán cumplir con los requisitos señalados en el artículo 19.

Artículo 28.- Proceso de formación de entrevistadores. La formación de los entrevistadores se llevará a cabo mediante un curso inicial de formación especializada en metodología y técnicas de entrevista investigativa videograbada a niños, niñas o adolescentes, y un programa de formación continua.

Los cursos de formación especializada en metodología y técnicas de entrevista investigativa, deberán incorporar a lo menos:

a) Los contenidos y actividades que garanticen que los participantes desarrollen correctamente cada una de las fases de una entrevista investigativa videograbada considerando el contexto penal chileno y las particularidades de niños, niñas o adolescentes víctimas de los delitos señalados en el inciso primero del artículo 1°.

b) Instancias de práctica con retroalimentación experta.

c) Sistema de evaluación que mida las competencias del entrevistador. Por su parte, el programa de formación continua contemplará un sistema permanente de capacitación, seguimiento y evaluación de las competencias del entrevistador, que garanticen la mantención de los conocimientos y habilidades adquiridas en el curso inicial de formación especializada previsto en el inciso anterior.

Para dar cumplimiento a lo establecido en este artículo, las instituciones señaladas en el artículo 27 podrán celebrar convenios con instituciones, organismos o entidades, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que impartan cursos de formación especializada en entrevistas videograbadas y que cumplan los estándares técnicos establecidos previamente por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el reglamento e, igualmente, con lo que dispongan los protocolos de atención institucional del artículo 31.

Los convenios deberán suscribirse de forma tal que aseguren la continuidad y calidad del proceso de formación de los entrevistadores.

Artículo 29.- Reglamento. Un reglamento dictado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos establecerá:

a) Los requisitos que deberán cumplir los candidatos a entrevistadores para acceder a los cursos de formación especializada en metodología y técnicas de entrevista investigativa videograbada y declaración judicial de niños, niñas o adolescentes, de conformidad con los estándares internacionales vigentes.

b) Las condiciones y requisitos que deberán cumplir los programas de los cursos de formación especializada en metodología y técnicas de entrevista y declaración judicial del niño, niña o adolescente.

c) La forma, condiciones y requisitos para la implementación del programa de formación continua, seguimiento y evaluación de las personas que efectuarán las entrevistas investigativas videograbadas y declaraciones judiciales.

d) La forma, condiciones y requisitos para el desarrollo de los procesos de acreditación de los entrevistadores y su vigencia.

e) Las especificaciones técnicas de las salas en que se desarrollen la entrevista investigativa videograbada y declaración judicial de niños, niñas o adolescentes.

f) Los estándares mínimos para la producción, almacenamiento, custodia y disposición de los registros de la entrevista investigativa videograbada y declaración judicial de niños, niñas o adolescentes.

g) La forma, condiciones, plazos y requisitos para revalidar la acreditación de entrevistador.

h) Cualquier otro aspecto necesario para la correcta implementación del sistema de entrevistas investigativas videograbadas y declaraciones judiciales de niños, niñas o adolescentes.

Los criterios que establezca el reglamento deberán ser revisados y actualizados, a lo menos, cada tres años, a fin de adecuar las prácticas nacionales a la evolución de los protocolos y reglas internacionales vigentes.

Artículo 30.- Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Corresponderá a este Ministerio ejercer las siguientes funciones:

a) Coordinar la actuación de los organismos encargados de dar cumplimiento a la presente ley, con el fin de establecer lineamientos, estándares y criterios generales. Esta coordinación se dará en el marco de las sesiones de la Comisión Permanente de Coordinación del Sistema de Justicia Penal, dispuesta en la ley N° 19.665.

b) Evaluar el funcionamiento del sistema, con el objeto de proponer las reformas que estime pertinentes, dentro del ámbito de su competencia. Asimismo, proponer a los organismos públicos involucrados en su funcionamiento los protocolos de actuación y atención institucional a niños, niñas o adolescentes.

c) Acreditar como entrevistadores, y revalidar dicha acreditación, a quienes cumplan con los requisitos establecidos en la presente ley y en su reglamento. Esta acreditación será siempre temporal, con un tiempo de vigencia establecido en el reglamento respectivo y cuya renovación estará siempre sujeta a la aprobación de los requisitos dispuestos en el mismo.

d) Mantener y administrar un registro actualizado de los entrevistadores con acreditación vigente, con indicación de la institución a la que pertenecen y su domicilio, el que estará siempre a disposición del Poder Judicial y del Ministerio Público, a través de medios técnicos óptimos.

Artículo 31.- Protocolos de actuación y atención institucional. Los protocolos de actuación y atención institucional a que hace referencia la letra b) del artículo 30 deberán considerar, al menos, los siguientes aspectos:

a) Los estándares de derivación de denuncias a las instancias correspondientes bajo los parámetros señalados en el artículo 4° de la presente ley.

b) Los estándares de coordinación interinstitucional que permitan que los niños, niñas o adolescentes, víctimas o testigos, reciban apoyo y puedan acceder a los recursos de resguardo de la salud física y psíquica, de manera oportuna y eficiente.

c) Los estándares de coordinación interinstitucional que permitan la adopción oportuna de medidas adecuadas de protección, con el objeto de atender las necesidades del niño, niña o adolescente.

d) Los estándares de coordinación interinstitucional que permitan que el sistema de entrevistas investigativas videograbadas y declaraciones judiciales de los niños, niñas o adolescentes mantenga, en todo momento, una adecuada cobertura territorial a nivel provincial y regional.

e) Las medidas para asegurar que las interacciones con niños, niñas o adolescentes se realicen en condiciones que resguarden su privacidad, confidencialidad y seguridad.

f) Las medidas que permitan generar las condiciones necesarias para que en cada interacción con niños, niñas o adolescentes, éstos puedan ejercer plenamente sus derechos conforme al desarrollo de sus capacidades.

g) Las medidas para evitar la realización de diligencias innecesarias, reducir al mínimo las entrevistas y procurar la celeridad y tramitación preferente de las diligencias, que supongan la interacción con niños, niñas o adolescentes.

h) Los estándares técnicos que deberán satisfacer los cursos de formación especializada de entrevistadores.

i) Las características de las entrevistas, las que se elaborarán bajo procedimientos estandarizados, basados en la experiencia empírica y en los resultados de la evaluación constante de la práctica de entrevistadores, como también, en los conocimientos técnicos existentes en la materia.

TÍTULO V NORMAS ADECUATORIAS

Artículo 32.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Procesal Penal:

1) Derógase el inciso tercero del artículo 78 bis.

2) Agrégase en el Libro I, Título IV, párrafo 6°, un nuevo artículo 110 bis, del siguiente tenor:

“Artículo 110 bis.- Designación de curador ad litem. En los casos en que las víctimas menores de edad de los delitos establecidos en los Párrafos 5 y 6 del Título VII del Libro II, y en los artículos 141 incisos cuarto y quinto, 142, 372 bis, 374 bis, 390, 391, 395, 397 N° 1, 411 bis, 411 ter, 411 quáter y 433 N° 1, todos del Código Penal, carezcan de representante legal o cuando, por motivos fundados, se estimare que sus intereses son independientes o contradictorios con los de aquel a quien corresponda representarlos, el juez podrá designarles un curador ad litem de cualquier institución que se dedique a la defensa, promoción o protección de los derechos de la infancia”.

3) Derógase el artículo 191 bis.

4) Suprímese, en el inciso segundo del artículo 280, la siguiente frase:

“o se tratare de la situación señalada en el artículo 191 bis”.

5) Incorpórase, en el artículo 310, a continuación de la palabra “intermedio”, la siguiente frase:

“, teniendo éste el deber de impedir que se formulen preguntas que puedan causar sufrimiento o afectación grave de la dignidad del niño, niña o adolescente, a efectos de resguardar su interés superior”.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo primero.- La presente ley comenzará a regir en forma gradual, de conformidad con el artículo 77 inciso final de la Constitución Política de la República, de acuerdo al cronograma que a continuación se indica:

Primera etapa: Entrará en vigencia transcurridos seis meses después de publicado en el Diario Oficial el reglamento a que alude el artículo 29, y comprenderá las regiones XV, I, II, VII, XI y XII.

Segunda etapa: Entrará en vigencia transcurridos dieciocho meses después de publicado en el Diario Oficial el reglamento a que alude el artículo 29, y comprenderá las regiones III, IV, VIII, IX y XIV.

Tercera etapa: Entrará en vigencia transcurridos treinta meses después de publicado en el Diario Oficial el reglamento a que alude el artículo 29, y comprenderá las regiones V, VI, X y Metropolitana.

Artículo segundo.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, para los efectos de la implementación del sistema, la formación de los entrevistadores que habrán de disponer la Policía de Investigaciones de Chile, Carabineros de Chile y el Ministerio Público, y la construcción de salas de toma de entrevistas investigativas y de declaración judicial, como también para dar inicio al proceso de acreditación y para el desarrollo de las demás funciones que la presente ley le asigna al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, los artículos 19 y 20, y el Titulo IV, entrarán en vigencia en la fecha de publicación de la ley.

Artículo tercero.- El reglamento a que alude el artículo 29 de esta ley deberá dictarse dentro del plazo de cuatro meses contado desde su publicación.

**Artículo cuarto.- El mayor gasto que represente la aplicación de la presente ley durante el primer año presupuestario de su entrada en vigencia, se financiará con cargo a las partidas 03 Poder Judicial, 10 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y 23 Ministerio Público, y en lo que faltare, con cargo a los recursos de la partida presupuestaria Tesoro Público, de la Ley de Presupuestos del Sector Público. En los años siguientes, los recursos se consultarán en los presupuestos de las respectivas partidas presupuestarias.**

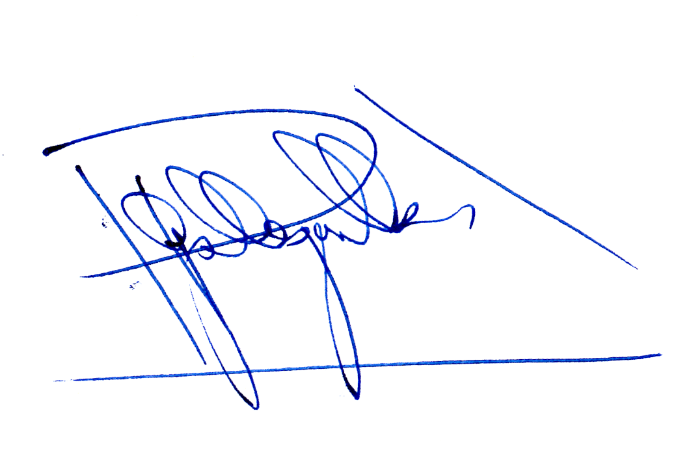
Artículo quinto.- El artículo 191 bis del Código Procesal Penal se entenderá vigente para todos los procesos que hayan sido iniciados antes de la entrada en vigencia de la presente ley.”.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Tratado y acordado en sesiones de 1°y 2 de agosto de 2017, con la asistencia de las diputadas señoras Nogueira, doña Claudia y Turres, doña Marisol y los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad; Gutiérrez, don Hugo; Monckeberg, don Cristián; Rincón, don Ricardo; Saffirio, don René; Soto, don Leonardo; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

Asistió, además, la diputada señora Rubilar, doña Karla.

Sala de la Comisión, a 2 de agosto de 2017.



**JUAN PABLO GALLEGUILLOS JARA**

Abogado Secretario de la Comisión